



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Ideología y clivajes partidarios en la conformación del socialismo como expresión política en Chile (1891-1938)

Fernández Carrozza, C.A.

Citation

Fernández Carrozza, C. A. (2024, February 27). *Ideología y clivajes partidarios en la conformación del socialismo como expresión política en Chile (1891-1938)*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3720019>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3720019>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Capítulo 1

La dimensión ideológica de los clivajes políticos: una exploración teórica

En este capítulo se plantean algunas precisiones metodológicas para un marco de análisis de la dimensión ideológica de los clivajes políticos desde una perspectiva histórica. Para desarrollar esta propuesta, el capítulo se divide en tres secciones. En la primera sección se presenta una revisión general de los estudios sobre clivajes políticos a nivel europeo, latinoamericano, y del caso chileno en particular. Partiendo de la definición planteada originalmente por Lipset y Rokkan (2001), el análisis de las democracias industriales europeas constituyó el caso de estudio clásico de los clivajes políticos. A partir de la década de 1960 este análisis se ha centrado principalmente en examinar los cambios de comportamiento electoral de los principales clivajes históricos, principalmente el de clase. Junto a esto, el énfasis ha estado puesto en evaluar la posible emergencia de nuevas líneas de conflicto desde fines del siglo XX.

En contraste con el estudio de Europa, en Latinoamérica la aplicación del concepto ha resultado problemática puesto que los conflictos históricos que estructuraron los sistemas de partidos europeos no se desarrollaron con la misma claridad. No obstante, ello no implica que la categoría no fuera de utilidad en el estudio de los países latinoamericanos. Junto a los clivajes tradicionales como el religioso o de clase, la política latinoamericana se ha estructurado a partir de una gran diversidad de conflictos de tipo territorial, cultural y étnico. Igualmente, como parte de las “nuevas democracias” surgidas a partir de la década de 1980, la categoría de clivaje ha sido particularmente provechosa para examinar los sistemas de partidos surgidos tras los regímenes dictatoriales en la región.

Por último, en el caso de Chile, el estudio de los clivajes fue crucial en la comprensión de los procesos políticos del siglo XX que culminaron con el golpe de Estado de 1973 y de la nueva configuración partidaria que surgió durante la transición a la democracia en la década de 1990. Para el periodo histórico aquí tratado, el caso chileno destaca por exhibir una estructuración partidaria similar a Europa occidental. Chile desarrolló un sistema de partidos con claros ejes divisorios de religión y clase social, que se consolidaron a través de una izquierda partidaria marcadamente socialista. ¿Cómo entender estas características de los clivajes en Chile a la luz de los estudios sobre Europa y Latinoamérica?

Para responder a esta interrogante, en la segunda sección se plantea la utilidad de abordar la dimensión ideológica de los clivajes como factor explicativo de sus procesos de formación. Si bien la ideología no es una categoría ignorada en la bibliografía sobre clivajes se argumenta que es tratada de forma inadecuada. Por un lado, la ideología se aborda de modo predominante desde metodologías cuantitativas que suelen reducirla a categorías binarias y excluyentes entre sí, y que en consecuencia aportan información limitada sobre su contenido. Por otro, el

concepto es escasamente definido y es asociado en términos muy amplios a valores, cultura, identidad, conciencia o marcos cognitivos.

Considerando lo anterior, se propone estudiar la dimensión ideológica de los clivajes a partir de una aproximación conceptual y discursiva, entendiéndola como una forma de pensamiento político compuesta por representaciones sociales colectivas que proporcionan a sus miembros una serie de creencias, ideas y conceptos que les permiten interpretar la realidad de modos particulares y actuar políticamente de acuerdo con sus propias visiones ideológicas. Desde ese punto de vista, son dos las características centrales del funcionamiento de las ideologías. En primer lugar, toda la ideología, en tanto se expresa principalmente a través del lenguaje, requiere de una estabilidad y una pretensión de universalidad a través de un proceso de despolemización, es decir, fijar significados específicos a sus conceptos y vocabularios. Sin embargo, en tanto todo lenguaje político se mantiene siempre abierto a nuevas definiciones, esta despolemización implica una permanente disputa por el lenguaje entre ideologías rivales, dimensión crucial en los procesos de conflicto político. En segundo lugar, las ideologías, como visiones de mundo particulares, ofrecen toda una serie de creencias e ideas que permiten a los grupos accionar políticamente, es decir, organizarse, cooperar e involucrarse entre sí. A este respecto, la expresión discursiva de las ideologías resulta crucial, pues el lenguaje actúa como el principal medio para incitar a determinadas pautas de acción.

Finalmente, en la tercera sección se proponen tres dimensiones de análisis para examinar el papel que juegan las ideologías en los procesos políticos. En primer lugar, la dimensión estratégica de las ideologías. Esta dimensión refiere al conjunto de conceptos y diagnósticos que permiten definir un problema político, identificar a los actores relevantes y plantear objetivos y pautas de acción. En segundo lugar, se examina la función organizacional de la ideología. Esta dimensión refiere, por un lado, a cómo determinados conceptos promueven ciertas estructuras organizativas por sobre otras. Por otro, al funcionamiento mismo de la organización, en la medida que las ideologías funcionan como un elemento de cohesión e identidad grupal, que articula las creencias compartidas y sirve de base para las prácticas y ritos de la colectividad. En tercer lugar, se examina la adaptabilidad de las ideologías en tanto estas permiten o dificultan la capacidad del grupo para crear marcos de oportunidad política. Dependiendo de su rigidez o plasticidad, las ideologías constituyen un factor clave para examinar cómo los grupos políticos son capaces de responder a los cambios y contingencias políticas, y al mismo tiempo, influir sobre los contextos y procesos políticos y sociales en los que se desenvuelven. De este modo, se sostiene que el concepto de ideología propuesto permite recuperar la agencia de los actores políticos usualmente reducidos al estudio de su comportamiento electoral y profundizar en su dimensión esencialmente histórica tal como lo reconocían inicialmente Lipset y Rokkan.

1.1 Clivajes políticos: estudios en Europa, América Latina y Chile

En esta sección se presenta una definición general del concepto de clivaje político y sus principales usos en los estudios sobre la política europea, latinoamericana y chilena. Si bien en cada uno de estos casos de estudio los clivajes exhiben características particulares, la categoría resulta útil en un nivel más amplio en tanto proporciona un modelo que da cuenta de la estructuración política y partidaria de las sociedades modernas. Como destaca Borschnier (2009: 1), “uno de los grandes atractivos del concepto (...) yace en su capacidad para ligar el comportamiento político individual con grandes procesos macro-históricos, y hacer sentido del modo en que las ‘coyunturas críticas’ pueden moldear trayectorias dependientes durante décadas”. Como se mostrará a continuación, el concepto de clivaje surge como modelo explicativo de los procesos de politización de los conflictos sociales, con distintos énfasis dependiendo de la región bajo estudio.

Esta sección se organiza en tres subtítulos que cubren los principales debates y aproximaciones al estudio de los clivajes en las regiones arriba señaladas. En primer lugar, se presenta una breve revisión del surgimiento del modelo de clivajes y sus aplicaciones iniciales, enfocados predominantemente en las democracias europeas occidentales. El debate en estos casos trata sobre la continuidad o cambio de los clivajes tradicionales, dentro de los cuales el de clase social resulta paradigmático. La segunda parte trata los usos del modelo de clivajes en Latinoamérica. A pesar de la aparente ausencia de clivajes claramente estructurados en la región, el concepto es asociado tanto a los conflictos específicos de la región, como a la estabilidad de sus sistemas políticos y regímenes democráticos. Finalmente, se abordan las principales interpretaciones sobre los clivajes en Chile, categoría que es ampliamente utilizada para el análisis de su desarrollo político durante el siglo XX. En este sentido, los debates sobre el caso chileno siguen al menos dos temáticas principales. Por un lado, Chile es reconocido por mostrar características similares a la estructura de conflicto de los países europeos desde inicios del siglo XX, que dio lugar a un sistema de partidos tripartito en derecha, centro e izquierda. Por otro lado, como parte de los procesos de transición democrática que experimentó la región durante los 1980, Chile no ha sido ajeno a la reevaluación de su sistema de partidos históricos. Dentro de este amplio campo de estudios, es posible identificar la insuficiente atención dada a los procesos históricos de formación de los clivajes, así como un uso predominante de herramientas metodológicas cuantitativas por sobre los análisis cualitativos.

1.1.1 Clivajes y cambio político en las democracias europeas

El concepto de clivaje político se desarrolló inicialmente durante la década de 1960 como categoría de análisis para explicar la formación de los sistemas de partidos en las democracias industriales europeas a partir de sus principales conflictos religiosos, territoriales, culturales y de clase. En un planteamiento inicial del

problema, Seymour Lipset introdujo dichos conflictos sociales como variables para examinar la estabilidad de las democracias modernas y la legitimidad de los sistemas políticos. En *El hombre político*, Lipset afirmaba que toda “democracia estable requiere la manifestación de un conflicto o una división”, debiendo conjugar la lucha legítima por el poder con el consenso, añadiendo que “el estudio de las condiciones que alimentan la democracia debe, por lo tanto, centrarse en torno a los orígenes de la división, así como a los del consenso” (Lipset, 1981: 21). En su análisis sobre la legitimidad del conflicto político, Lipset identificó tres problemas centrales en las sociedades occidentales: el lugar de la Iglesia, la inclusión política de los estratos obreros, y el conflicto de la distribución de la renta. Sin embargo, para el autor el eje principal de conflicto en la política moderna lo constituía la clase social. “Más que cualquier otra cosa, la lucha de partidos constituye un conflicto de clases”, pues “virtualmente en todo país económicamente desarrollado los grupos de menores ingresos votan principalmente por los partidos de izquierda, mientras que los grupos de mayores ingresos lo hacen por los de derecha” (Lipset, 1981: 197).

El estudio de las divisiones y conflictos políticos fue posteriormente teorizado como clivaje por Lipset y Rokkan (2001) en *Cleavage Structure, Party Systems and Voter Alignments* y por el propio Rokkan (1970), definiéndolo como una categoría para examinar cómo las oposiciones y conflictos sociales estructuraron los sistemas de partidos en las democracias occidentales. Centrándose en la génesis y desarrollo de estos sistemas de divisiones, y en el posterior comportamiento electoral de las masas, los autores plantean un modelo histórico que requiere “diseñar el mapa de *las secuencias de alternativas* establecidas por los ciudadanos” en cada sistema. Desde este punto de vista, “los partidos no se presentan simplemente *de novo* al ciudadano en cada elección”, sino que “cada uno de ellos tiene una historia, y también la tiene el conjunto de alternativas que ofrecen al electorado”. En términos de análisis, esto implica considerar, en primer lugar, “los procesos iniciales para llegar a la política competitiva y a la institucionalización de las elecciones masivas”, para luego “desenredar la maraña de divisiones y oposiciones que produjeron el sistema nacional de organizaciones de masas para la acción electoral”. Solo entonces es posible “cierta comprensión de las fuerzas que producen los alineamientos actuales de votantes que están detrás de las alternativas históricamente dadas” (Lipset y Rokkan, 2001: 232).

Aplicando este modelo al caso europeo, Lipset y Rokkan identifican cuatro clivajes surgidos de los dos principales procesos de transformación en la Europa moderna: las revoluciones nacionales y la revolución industrial. La revolución nacional originó dos clivajes asociados a la centralización territorial y cultural producida durante la construcción de los estados nacionales. Por un lado, un clivaje centro-periferia a partir del “conflicto entre la cultura central que construye la nación y la resistencia reciente de las poblaciones sometidas de las provincias y las periferias, étnica, lingüística o religiosamente diferencias”. Por otro, un clivaje religioso surgido del conflicto entre “el Estado-nación centralizante, regularizador y movilizador, y los privilegios corporativos históricamente establecidos de la Iglesia”.

En tanto, la revolución industrial produjo lo que suele denominarse un *clivaje sectorial* (Borschnier, 2009), es decir, el conflicto entre los intereses de terratenientes y empresarios industriales, y un clivaje de clase producido por “el conflicto entre propietarios y patronos por un lado y arrendatarios, jornaleros y obreros por el otro” (Lipset y Rokkan, 2001: 245-246). La hipótesis central de los autores es que hacia la década de 1920 esta estructura de conflicto habría experimentado un “congelamiento” cuyo resultado fueron los sistemas de partidos de mediados del siglo XX, caracterizados por el predominio del conflicto de clase y, en menor medida, religioso.

Otras aproximaciones posteriores al tema han ampliado el modelo de clivajes propuesto por Lipset y Rokkan. Por ejemplo, Robert Dahl (1966: 367-371) recurre a los clivajes para analizar la permanencia y cambios en los patrones de oposición política en las democracias occidentales. Desde su punto de vista, los cambios en las oposiciones políticas pueden atribuirse a cambios en los factores sociales y políticos, abarcando “no solo clase, estatus social y ocupación sino también factores sociales como religión, grupo étnico y lenguaje”. Estos factores son los que originan una serie de lealtades, afiliaciones, opiniones y actitudes que se manifiestan en determinados patrones de comportamiento político. Así, es posible identificar premisas culturales ampliamente compartidas por un número significativo de la población, las que a su vez conviven con subculturas con un conjunto distintivo de actitudes, opiniones y valores estables en periodos relativamente largos de tiempo, otorgando a sus miembros una identidad que los distingue de otras subculturas dentro de un mismo país.

Desde otra perspectiva, Harry Eckstein (1966) propuso conceptualizar los clivajes a partir de tres categorías de oposiciones políticas. En primer lugar, existen divisiones políticas que se refieren a *desacuerdos específicos*, relacionados a políticas concretas y problemas procedimentales. En segundo lugar, identifica *divergencias culturales* que, a diferencia de otro tipo de divisiones, surgen de “diferencias significativas en los mapas u orientaciones culturales generales, a través de los cuales los hombres interpretan sus experiencias políticas y definen sus preferencias políticas”. Por último, Eckstein (1966: 33) identifica aquellas divisiones que denomina *clivajes segmentales*. La particularidad de los clivajes segmentales es que son divisiones estrechamente relacionadas a “líneas de diferenciación social objetiva” basadas en raza, lenguaje, regional, religión u ocupación.

A pesar de los variados usos de esta categoría en las décadas siguientes, Zuckerman (1975: 236-238) indica que casi todas las definiciones del concepto se refieren a la presencia de divisiones políticas extensas y persistentes en el tiempo. No obstante, de acuerdo con los trabajos de Bartolini y Mair (Bartolini y Mair, 2007; Bartolini, 2000), el principal problema del concepto de clivaje en la mayoría de sus definiciones yace en su posición intermedia entre las aproximaciones sociológicas de estratificación social, por un lado, y en los estudios sobre el impacto de las instituciones políticas en la estructura social, por el otro. La síntesis teórica y analítica de estas aproximaciones resulta compleja, y en consecuencia el concepto

suele ser definido hacia “abajo” como “clivaje social”, o bien, a la inversa, elevado a la categoría de “clivaje político”. Más aún, en numerosas definiciones el concepto de clivaje no refiere necesariamente a una oposición específica, asociándose a divisiones o conflictos que no siempre implican la presencia de un clivaje político-partidista como tal.

A raíz de este problema, Bartolini y Mair (2007: 199) han elaborado una definición de clivaje que reconozca la relación entre estructura social y orden político, así como los diversos factores involucrados en el desarrollo de un conflicto político. Los autores consideran que una correcta definición de clivaje debe incorporar tres elementos principales: “un *elemento empírico*, que identifique el referente empírico del concepto y que pueda definir en términos socioestructurales”; un *elemento normativo* referido al “conjunto de valores y creencias” que dan identidad a los elementos normativos; y un *elemento organizacional/conductual*, esto es, “el conjunto de interacciones individuales, instituciones, y organizaciones” que se desarrollan como parte del clivaje. Desde esta perspectiva, no toda división social constituye un clivaje, sino solo cuando se produce una combinación de estas tres dimensiones. En definitiva, existen clivajes cuando una oposición alcanza suficiente intensidad en términos emocionales entre sus miembros y genera un lazo social y organizacional duradero entre los mismos. Así, su estabilización y duración en el tiempo genera un trasfondo cultural específico y colectivo que va más allá de los individuos. Considerando lo anterior, Bartolini (2000: 18) sostiene que un clivaje debe ser considerado “como una forma de cierre de relaciones sociales”, pues establece los límites y diferencias con la base socioestructural que le sirve como punto de referencia.

En cuanto a la aplicación del modelo, el grueso de la literatura sobre clivajes examina lo que Lipset y Rokkan llaman “hipótesis de congelamiento” de los sistemas de partidos. En efecto, como señalan Bartolini y Mair (2007: 59), la cuestión del *cambio* es uno de los temas dominantes en los estudios sobre partidos y sistemas de partidos. Este se encuentra directamente relacionado al análisis de los clivajes políticos, el cual, desde su planteamiento inicial, se centra casi exclusivamente en el estudio de los procesos de realineamiento electoral, las transformaciones sociales del electorado y en testear el supuesto congelamiento que habrían experimentado los sistemas de partidos. Siguiendo a Mair (2001), el debate respecto a la continuidad o debilitamiento de los clivajes tradicionales ha decantado en dos aproximaciones a este fenómeno. Por un lado, un conjunto de estudios destaca la permanencia de los partidos políticos tradicionales surgidos de los principales clivajes propuestos originalmente por Lipset y Rokkan, así como la importancia que estos mantendrían en la política democrática contemporánea. Por otro lado, la perspectiva contraria ha enfatizado el debilitamiento de los clivajes tradicionales, ya sea por transformaciones estructurales o culturales, y el consecuente surgimiento de nuevos conflictos y clivajes que vendrían a renovar los sistemas de partidos occidentales.

La primera de estas aproximaciones se ha enfocado en problematizar el supuesto cambio político en torno a los clivajes, destacando la persistencia de las divisiones políticas de inicios del siglo XX, la estabilidad electoral y la continuidad que exhiben los sistemas de partidos. Uno de los primeros trabajos en argumentar a favor de la estabilidad y continuidad de los clivajes fue el estudio de Rose y Urwin (1970), quienes sostenían que desde 1945 hasta la década de 1960 la fuerza electoral de los partidos tradicionales había experimentado escasa variación. Aunque investigaciones posteriores han matizado dicha estabilidad, destacan sin embargo la continuidad de las divisiones políticas históricas en las democracias europeas, incluso a pesar de las transformaciones sociales y electorales ocurridas entre las décadas de 1970 y 1980. Relativizando la percepción de cambio predominante en la ciencia política durante dicho periodo, Bartolini y Mair (2007) sostiene que el periodo 1885-1985 fue uno de continua estabilización del electorado. Más aún, Mair (1997: 78) es enfático en afirmar que el argumento de cambio electoral, pese su popularidad, carece de fundamento suficiente, siendo más bien una imagen “mítica”. Asimismo, desde los análisis de comportamiento electoral, estudios como los de Evans (1999, 2000), Brooks *et al* (2006) y Elff (2007), mantienen que las divisiones más importantes de la política europea, como la religión o clase, no han decaído tan significativamente como pronosticaban quienes defendían el debilitamiento de los clivajes tradicionales. Más recientemente, Della Porta (2015) ha sostenido incluso que los movimientos sociales surgidos contra las recientes medidas de austeridad en Europa pueden interpretarse como una reemergencia del clivaje de clase.

En contraste, la segunda aproximación ha proporcionado numerosa evidencia sobre la transformación de los clivajes, con la obra de Inglehart (1971, 1977, 1987) como punto de partida en el cuestionamiento a la persistencia de los clivajes históricos. Para Inglehart, el cambio intergeneracional y la superación de las necesidades económicas en las sociedades industriales provocaron una transformación cultural y valórica expresada en el surgimiento de nuevos intereses posmateriales que no se ajustaban a las divisiones políticas existentes. Numerosos estudios posteriores profundizan en el fenómeno de debilitamiento de los clivajes al examinar los cambios en los patrones y determinantes de votación del electorado, concluyendo que los partidos tradicionales, organizados en torno a conflictos religiosos o de clase, han experimentado un declive durante la segunda mitad del siglo XX (Dalton y Flanagan, 1984; Pedersen, 1990; Dogan, 2001; Franklin *et al.*, 1992; Wolinetz, 1990).

En esta línea, algunos autores relevan las nuevas líneas de conflicto político que han transformado los sistemas de partidos durante las últimas décadas. Por ejemplo, Dalton (1984, 2018) ha notado el debilitamiento de los lazos partidarios y el surgimiento de sujetos apartidistas, al tiempo que la política se centra cada vez más en problemas o temáticas (*issues*) específicas que estructuran la competencia electoral. Más enfáticos, Kriesi *et al* (2006, 2008) sostienen que los efectos de la globalización han provocado un nuevo conflicto en los países europeos entre quienes “pierden” y quienes se benefician de sus efectos, en lo que el mismo Kriesi

(2012) denomina *demarcation-integration cleavage*. En una línea similar, Hooghe y Marks (2018) interpretan el rechazo a los recientes movimientos de inmigración como un “clivaje transnacional”. Ante la continua evidencia de cambio político y el surgimiento nuevos ejes de conflicto, Mair *et al* (2004: 1) sostiene que “es la erosión de las lealtades de los votantes, en lugar de su reforzamiento o incluso estabilización, lo que más claramente ha marcado el ambiente político occidental durante los últimos 20 años”.

Por último, cabe considerar que las interpretaciones respecto a las transformaciones de los conflictos y clivajes políticos varían en gran medida dependiendo de las variables y factores considerados en los modelos de análisis. Teniendo en cuenta el progresivo abandono de los estudios basados en variables económicas estructurales y de estratificación social (Clark y Lipset, 1991), la permanencia o cambio de los sistemas de partidos se asocia más bien a factores culturales, valóricos o institucionales. Así, algunas propuestas como la de Knutsen y Scarbrough (1998) destacan el rol de las orientaciones culturales como una dimensión relevante para explicar el cambio de los clivajes. Para Van Deth (1998: 2), este factor resulta significativo en tanto los “desplazamientos en las orientaciones valóricas tienden a inducir el cambio en los modos y niveles de participación política”. En contraste, la insistencia de Mair (1997: 9) en la estabilidad de los clivajes se sustenta en su consideración de que los partidos y sistemas de partidos pueden controlar y constreñir las alternativas políticas. Una vez establecidos, los sistemas de partidos tienden a generar su propio *momentum* debido a la capacidad de los partidos políticos para “limitar tanto las alternativas como el cambio”. En una propuesta más actualizada, Bornschier (2010) postula un modelo centrado en las identidades políticas. Aunque reconoce el rol de los partidos para perpetuar los clivajes, Bornschier sostiene que “es más bien la estabilidad de los patrones de interacción entre partidos lo que perpetúa los alineamientos políticos”, es decir, los sistemas de partidos se reproducen a sí mismos en tanto mantienen las líneas de conflictos que generan los “esquemas cognitivos” que permiten a los individuos interpretar la actividad política (58-59).

En suma, la revisión de la bibliografía sobre clivajes políticos en Europa occidental permite afirmar la utilidad de la categoría para la interpretación de sus sistemas políticos y de partidos, los que hacia mediados del siglo XX habían alcanzado un grado significativo de institucionalización y estabilidad. Desde esta perspectiva, los ejes de conflicto propuestos inicialmente por Lipset y Rokkan que estructuraron la política europea moderna, principalmente clase social y religión, son ampliamente aceptados por los trabajos que recurren al modelo de clivajes. Dentro de los estudios que siguen esta propuesta interpretativa, los principales debates han girado casi exclusivamente en torno a la “hipótesis del congelamiento” de los clivajes sugerida por los propios Lipset y Rokkan. En este sentido, los análisis se abocan a examinar la continuidad o cambio de dichos clivajes, cuyo caso paradigmático es el de clase social. Más recientemente, las investigaciones en torno a este tema se han ampliado de modo significativo al integrar, junto a las

tradicionales variables institucionales y socioeconómicas, nuevos factores de tipo cultural, valórico e identitario. Esta ampliación de enfoques ha permitido que el modelo de clivajes sea utilizado para interpretar los nuevos conflictos sociopolíticos asociados a la globalización, la migración y el surgimiento de nuevos movimientos sociales.

No obstante, también es posible advertir que la bibliografía aborda los clivajes y sus transformaciones desde una perspectiva casi exclusivamente electoral. Otras aproximaciones de tipo cualitativo o histórico han tenido menor desarrollo, cuestión que puede resultar relevante cuando, como en los casos latinoamericanos, existen menores niveles de institucionalización o no existe continuidad electoral suficiente, lo que no implica necesariamente la ausencia de clivajes. Igualmente, la aceptación sin mayor discusión de los patrones de clivajes europeos puede inducir a la idea de que en otras regiones la categoría no es replicable. Si bien el modelo surge estrechamente relacionado al estudio de Europa occidental como se verá a continuación, los clivajes políticos también son objeto de estudio en Latinoamérica, siendo aplicados al análisis de los conflictos y procesos políticos particulares de la región.

1.1.2 Los clivajes en los países latinoamericanos

Los estudios sobre los sistemas de partidos en Latinoamérica suelen ser incluidos dentro de las llamadas “nuevas democracias”, en contraste con los países europeos, o bien como parte de la tercera ola democratizadora postulada por Huntington (1991). Estas nuevas democracias, además de América Latina, abarcan un amplio rango de países que incluyen a la Europa oriental postcomunista, así como a porciones de África y Asia. A pesar de la diversidad política, económica y social de estas regiones, en lo que se refiere a sus sistemas de partidos estos países se caracterizan por sus marcadas diferencias con los procesos de estructuración política de las democracias europeas occidentales. Las revoluciones nacionales e industriales que se sucedieron en Europa y la consecuente formación de clivajes organizados en divisiones de clase, religión o territorio no se replicaron o no se desarrollaron en estas regiones del mismo modo.

En este sentido, la capacidad explicativa del modelo de clivajes sería menor en las nuevas democracias pues, como afirma Van Biezen, “el concepto de clivaje es el producto de una transformación muy específica que tuvo lugar exclusivamente en Europa occidental” (en Bornschier, 2009: 7). Un juicio similar mantiene Randall (2001) respecto a la construcción modélica de los clivajes a partir de los casos europeos, añadiendo que las particularidades de las nuevas democracias se deben no solo a diferencias en su desarrollo político, sino principalmente a la falta de autonomía de sus sistemas, sujetos a numerosas influencias externas. Igualmente, Van Biezen (2005) nota que los partidos de las nuevas democracias respondieron a procesos *sui generis* y su principal contraste con los casos occidentales se encuentra en que se originaron desde el Estado y no desde la sociedad civil. Por su parte,

Mainwaring y Torcal (2005: 142) son enfáticos al sostener que la literatura sobre “las democracias industriales avanzadas no sirve para las democracias y semidemocracias de los países menos desarrollados”, pues sus sistemas de partidos “están marcadamente menos institucionalizados que los de las democracias industriales avanzadas”.

Dentro de este marco general, el estatus de América Latina es ambivalente. Si bien se reconoce que América Latina constituye uno de los casos más cercanos al europeo (Dix, 1989: 23; Randall, 2001: 250), las particularidades de su desarrollo, como su temprana independencia política y su incorporación a la revolución industrial como países exportadores de materias primas, repercutieron estructural e institucionalmente de modo tal que, con anterioridad a los 1930, hubo pocas oportunidades para la construcción de partidos políticos modernos (Cammack, 1994: 181-182). En efecto, entre los estudios que mostraron un incipiente interés por la política latinoamericana (Fitzgibbon, 1957; Martz, 1964; Chalmers, 1972), se llamó la atención sobre las peculiaridades de sus partidos políticos, cuya gran diversidad, rasgos personalistas, difusas líneas ideológico-programáticas y debilidad institucional suponían dificultades para su clasificación en los clivajes tradicionales. A esta problemática partidista se sumaban las propias debilidades de sus regímenes políticos, cuestión que a partir de la década 1960 se expresó de forma generalizada en quiebres democráticos y la instauración de dictaduras en numerosos países de la región.

Estas características de los sistemas políticos y de partidos en América Latina delinearon de modo importante el estudio de los clivajes. Debido a la ausencia de partidos institucionalizados y estables en la región, la teoría de clivajes tuvo inicialmente escasa aplicación a los estudios de caso latinoamericanos. No obstante, el examen de los partidos políticos adquirió progresiva importancia al ser incorporados durante la década de 1970 como variables de la estabilidad democrática, con énfasis en dimensiones poco teorizadas en los modelos de clivajes europeos, tales como sus niveles de institucionalización y dinámicas de competencia. A partir de estos trabajos, un conjunto de investigaciones se ha centrado en el estudio de los clivajes propiamente tal, estableciendo el análisis de los partidos latinoamericanos como un campo de estudio significativo. Aunque este campo no es abordado sistemáticamente a nivel comparado, ofrece un marco de interpretación para algunos clivajes significativos como el de clase, y más recientemente para las transformaciones que experimentaron los sistemas de partidos a partir de la tercera ola democratizadora.

Dentro de los primeros estudios que abordaron la dimensión partidista de los sistemas políticos en América, el énfasis estuvo puesto en el rol de los partidos en la estabilidad de los regímenes democráticos y en los procesos políticos que derivaron en su ruptura (Linz, 1978; Cavarozzi y Garretón, 1989; Diamond *et al.*, 1999). Así, los sistemas de partidos fueron estudiados desde diversos puntos de vista, examinando sus orígenes y composición, sus niveles de polarización y el comportamiento político y electoral de los partidos individuales. Desde este punto

de vista, los partidos fueron revalorizados como actor político. Como sostiene Diamond *et al* (1999: 25-29), dada las diversas funciones que cumplen los partidos en la representación de intereses y en la movilización política, “los procesos de formación partidaria, el rol particular que desempeñan los partidos individuales en diferentes momentos, y en general la fuerza y viabilidad –institucionalización– de los partidos y sistemas de partidos son un factor importante para comprender históricamente el éxito o fracaso de la democracia”.

A partir de lo anterior, la experiencia histórica de las dictaduras latinoamericanas llevó a un renovado interés por la organización y estabilidad de sus sistemas de partidos. Para ello, autores como Dix (1992), pero sobre todo Mainwaring (2018) y Mainwaring y Scully (1995) postularon la importancia de estudiar los niveles de institucionalización partidaria en América Latina, dimensión no considerada originalmente en el modelo de clivajes de Lipset y Rokkan. Desde esta perspectiva, la institucionalización de los sistemas de partidos fue definida como la estabilidad en los patrones de interacción de la competencia partidaria. Considerando variables relacionadas a las reglas de competencia, los niveles de organización y el compromiso con los mecanismos democráticos, estas investigaciones concluyeron que tras el fin de regímenes autoritarios los sistemas de partidos de la región sufrieron diversas transformaciones.

Sobre este punto, Mainwaring (2018: 8-9) ha identificado algunos patrones generales. En algunos países, los partidos se consolidaron, mostrando una notoria estabilidad (Chile, Uruguay) o bien un creciente nivel de institucionalización (Brasil, México, Salvador, Panamá). Mientras que en otros se sucedieron procesos de profunda erosión (Argentina, Colombia, Costa Rica) y de colapso integral del sistema de partidos (Ecuador, Bolivia, Venezuela), además de aquellos con una institucionalización históricamente baja (Guatemala, Paraguay). Si bien en estas aproximaciones los clivajes políticos no constituyen un tema central, las transformaciones evidenciadas en los sistemas de partidos antes y después de los quiebres democráticos pusieron en relieve la importancia de las estructuras de clivajes en ambos momentos. ¿Qué características presentaban los partidos latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX? Y, ¿en qué sentido las experiencias autoritarias modificaron dichas características?

Trayectorias partidarias locales

Respecto a los clivajes previos a los quiebres democráticos, el momento clave de las formaciones partidarias se encuentra en las primeras décadas del siglo XX, cuyos resultados fueron notoriamente divergentes con los de Europa occidental en el mismo periodo. Aunque la mayoría de los países de América Latina exhibieron durante el siglo XIX un clivaje conservador-liberal, centrado sobre todo en disputas religiosas, las formaciones partidarias respondieron principalmente por la industrialización y el consecuente conflicto de clase. En este escenario, la incorporación de nuevos sectores sociales dependió de “la respuesta de los partidos

y líderes tradicionales a los desafíos de crear movimientos políticos que fueran más allá de las camarillas de notables para incorporar a las clases medias (...) y a la clase obrera” (Diamond *et al.*, 1999: 26). En este sentido, Dix (1989) señala que la mayoría de los países latinoamericanos no siguieron la evolución incremental observada en Europa, en que los nuevos partidos de clase desplazaron en importancia a las organizaciones de clivajes previos. Por el contrario, como argumenta Cammack (1994: 182-185), con la excepción de Chile y parcialmente Argentina, antes de 1930 hubo pocos incentivos para la formación de partidos políticos modernos. Debido a la incapacidad de las burguesías nacionales para asegurar sus intereses dentro de los marcos democráticos y la propia debilidad de la clase obrera, la incorporación de nuevos sectores sociales se produjo a través de partidos fundados desde el Estado o, como señala Dix, de tipo *catch-all*. Así, partidos con una clara identificación de clase, como comunistas y socialistas, no tuvieron especial éxito en la región, desarrollándose en cambio una gran diversidad de corrientes políticas.

La contribución más significativa al campo de estudio de los clivajes políticos continúa siendo la investigación de Collier y Collier (1991) sobre el cambio político y las dinámicas de los regímenes de ocho países latinoamericanos durante el siglo XX. Mediante un análisis comparado de las coyunturas críticas –aquellos periodos de cambio político y social profundo y permanente– los autores analizan las distintas modalidades de incorporación del movimiento obrero en sus respectivos sistemas políticos. En términos generales, los autores identifican dos formas de incorporación que explican la diversidad de movimientos y partidos políticos que se cristalizaron a mediados del siglo XX. En los casos de Chile y Brasil, los periodos de incorporación se iniciaron en las décadas de 1920 y 1930 respectivamente, y se caracterizaron por ser procesos dirigidos principalmente desde el Estado a través de caudillos y líderes populares (Alessandri e Ibáñez en Chile, Getulio Vargas en Brasil), con el propósito de despolitizar y controlar al movimiento obrero. No obstante, en ambos casos, estos proyectos de incorporación fracasaron y fueron seguidos por el establecimiento de regímenes competitivos. En ese contexto, el movimiento obrero se reactivó y reorganizó políticamente en partidos comunistas, así como en partidos con características populistas como el Socialista en Chile, y el Partido Laborista y el Social Democrático bajo la tutela de Vargas en Brasil. En ambos países, estos partidos se caracterizarían por su autonomía política y la permanente dificultad de formar coaliciones multclasistas exitosas con partidos de centro, lo que desembocó en una creciente polarización ideológica.

En contraste, el resto de los países analizados experimentaron una incorporación que los autores denominan partidaria, pero con trayectorias y alternativas marcadamente divergentes. En los casos de Uruguay y Colombia se desarrolló un tipo particular de incorporación a través de los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, respectivamente. No obstante, como indican Collier y Collier, ambos partidos experimentaron un doble proceso de estabilidad electoral, pero de permanente conflicto social debido a su incapacidad para establecer lazos duraderos con el movimiento sindical, lo que en el caso de Uruguay contribuyó al

quiebre democrático, y en Colombia a una progresiva despolitización y violencia política. Una vertiente distinta se produjo en Perú con el Partido Aprista y en Argentina con el peronismo, clasificados como “populismo obrero” y caracterizados por sus fuertes vínculos con el movimiento obrero y su postura antioligárquica, pero con una escasa incorporación de sectores campesinos. Lo característico en la evolución de estos partidos fueron sus largos periodos de proscripción, lo que sumado a la fragmentación ideológica del peronismo y al giro hacia la derecha del aprismo, redundó en una débil institucionalización partidaria. Por último, los casos de México con el Partido Revolucionario Institucional y Venezuela con Acción Democrática, son considerados como expresión de un “populismo radical”. Estos partidos no solo se distinguieron por sus altos niveles de integración, capaces de incluir al campesinado, sino también por sus posiciones hegemónicas en sus respectivos sistemas políticos, lo que les permitió mantener apoyo popular, excluir exitosamente a otros competidores menores y evitar quiebres democráticos.

A este conjunto de alternativas partidarias habría que añadir, en un periodo relativamente más tardío, la conformación de partidos demócratacristianos que, a pesar de su disímil peso político entre los países de la región, constituyeron una importante opción partidaria en términos religiosos y de clase. Surgidos como resultado de la difusión de la doctrina social de la Iglesia y de las transformaciones socioeconómicas de inicios del siglo XX (Hawkins, 2010), los partidos demócratacristianos representaron una alternativa política de base católica con independencia de la Iglesia, y ocuparon una amplitud de posiciones en el espectro político latinoamericano (Mainwaring y Scully, 2010). Si bien en la mayoría de los países su éxito fue limitado, en algunos casos tuvieron un importante rol en sus sistemas de partidos. Así, en Chile el Partido Demócrata Cristiano (PDC), ubicado en el centro político, logró ser el partido más grande en la segunda mitad del siglo XX, movilizándolo a los sectores rurales hasta entonces excluidos. Igualmente, en Venezuela la Comisión de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) fue la segunda fuerza partidaria más grande, configurando junto con AD el sistema bipartidista que caracterizó a este país hasta los 1990. Aunque con un éxito relativamente menor, estos partidos también fueron relevantes en México con el Partido de Acción Nacional (PAN), así como en El Salvador, Guatemala y, en menor medida, en Perú.

Hacia finales del siglo XX, esta dificultosa y variada construcción partidista en la región se vio sujeta a un nuevo proceso de realineamiento y reconfiguración a partir de la tercera ola democratizadora. Según Roberts (2014, 2016a, 2016b), desde la década de 1970 hasta la de 1990 se produjo una nueva coyuntura crítica que modificó significativamente los sistemas partidarios y clivajes existentes. Para el autor, esta coyuntura crítica abarcó lo que denomina una “doble transición” hacia regímenes democráticos desde fines de los 1970, y luego hacia políticas neoliberales de mercado durante los 1980 y 1990. El modo en que se estructuraban los sistemas de partidos previamente a dicho periodo, así como la reacción y adaptación que tuvieron frente a las políticas de libre mercado, definieron decisivamente el

realineamiento y reordenamiento de los partidos en la región. El resultado fue, al igual que durante la primera mitad del siglo XX, una reestructuración de los sistemas de partidos extremadamente diversa, con países que mantuvieron su estabilidad y en algunos casos reforzaron su institucionalidad, mientras que otros sufrieron una progresiva desinstitucionalización y el total colapso de los partidos existentes.

Respecto a las consecuencias de las experiencias autoritarias, si bien el énfasis ha estado puesto en los niveles de institucionalización, un proceso igualmente relevante fue la creación de nuevas organizaciones que se integraron efectivamente a los sistemas partidarios. Tomando distancia del pesimismo existente sobre la debilidad de los partidos latinoamericanos, Levitsky, Loxton y Van Dyck (2016) se han centrado en la construcción partidaria en los autoritarismos y en cómo lograron perdurar exitosamente luego de las transiciones democráticas. Para los autores, el desenvolvimiento de los partidos durante las dictaduras resultó clave ya que la experiencia de represión y movilización popular produjo una herencia organizacional que permitió la sobrevivencia de los nuevos partidos. Esto es claro sobre todo en los partidos de izquierda identificados por los autores, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Frente Martí de Liberación Nacional en El Salvador, o el Partido Por la Democracia en Chile. Sin embargo, su modelo también considera a algunos partidos de derecha que, a través de las redes clientelares y territoriales heredadas del autoritarismo, lograron una exitosa institucionalización como fue la Unión Demócrata Independiente en Chile, y la Alianza Republicana Nacionalista en El Salvador.

Pese a la importancia de los autoritarismos y las transiciones democráticas, fueron las políticas de libre mercado las que indujeron cambios más profundos en los sistemas de partidos al erosionar las bases obreras de la izquierda tradicional. Considerando que las democracias latinoamericanas recientes han mostrado una persistente contradicción entre igualdad legal y desigualdad socioeconómica, salta a la vista la inexistencia de un clivaje de clase durante el periodo neoliberal (Drake, 2009: 14). De acuerdo con Roberts (2002), la implementación de medidas neoliberales debilitó sustantivamente a las organizaciones sindicales y obreras, lo que dificultó la configuración de un clivaje de este tipo. Adicionalmente, la adaptación de la izquierda a las políticas de libre mercado llevó a que sus partidos adoptaran dicho modelo económico, desdibujando sus posiciones partidarias previas (Roberts, 2016b: 273-277). En los casos más dramáticos, el APRA peruano y la Acción Democrática venezolana sufrieron un desplome político y electoral que redundó en el colapso de sus respectivos sistemas de partidos. En otros países, como Uruguay, Brasil y Chile, la oposición inicial a las medidas liberales logró ser canalizada efectivamente a través de partidos de izquierda que, no obstante, mantuvieron los modelos neoliberales. En contraste, el caso de Brasil destaca como uno de los más relevantes ya que la formación del PT contribuyó a la institucionalización de su previamente débil sistema de partidos. De modo similar, la principal excepción al debilitamiento de los partidos de clase fue el Partido

Justicialista en Argentina, expresión partidaria del peronismo. Como muestra Levitsky (2003), fue una de las pocas organizaciones en la región que mantuvo su carácter de masas y sindical, adaptándose a las políticas neoliberales implementadas por el propio partido durante el mandato del presidente Carlos Menem (1989-1999).

Por último, es necesario considerar que las transformaciones políticas y económicas descritas, si bien debilitaron los clivajes ya existentes, al mismo tiempo abrieron la posibilidad para el desarrollo de nuevos conflictos sociales. En Latinoamérica, el clivaje más relevante durante las últimas décadas ha sido el étnico. A pesar de la importante población indígena de la región, las demandas de estos grupos tendieron a ser subsumidas dentro de otros clivajes, o bien no fueron incorporadas en los nuevos sistemas de partidos, lo que se expresó en una alta volatilidad electoral en aquellos países con numerosa población indígena (Madrid, 2005). Es justamente tras la coyuntura crítica identificada por Roberts en que comienzan a articularse movimientos y partidos a partir de líneas de división étnicas. Para Yashar (2005), este proceso se vio impulsado por el debilitamiento de las organizaciones de base obrera y campesina, lo que permitió el surgimiento de las demandas indígenas. No obstante, de acuerdo con Van Cott (2003, 2005), el debilitamiento de los alineamientos políticos tradicionales no explica totalmente este nuevo clivaje étnico. Perú, a pesar del colapso del sistema de partidos y su alto porcentaje de población indígena, no tuvo partidos indígenas importantes, mientras que Venezuela y Colombia, con menor población indígena, levantaron movimientos relativamente exitosos. Para Van Cott, el surgimiento del clivaje indígena se explica por factores institucionales, sobre todo la apertura y descentralización del sistema político, que hicieron electoralmente viables a organizaciones de este tipo. En ese sentido, los casos de Ecuador y Bolivia constituyeron algunos de los casos más exitosos de organizaciones indígenas en sistemas de partidos que han exhibido una debilidad institucional histórica.

En suma, la capacidad explicativa del modelo de clivajes en los sistemas de partidos latinoamericanos depende en gran medida de las variadas trayectorias históricas de cada país. A diferencia de Europa, en América Latina el estudio de los clivajes se ha visto limitado por la ausencia de patrones políticos comunes y estables en sus distintos países y, en consecuencia, a formaciones partidarias débiles. Parte importante de las particularidades de los partidos latinoamericanos se explica por el desarrollo que tuvieron sus revoluciones nacionales e industriales, que a diferencia de Europa no derivaron en un clivaje de clase claramente definido de acuerdo con el modelo de Lipset y Rokkan. Igualmente, y a pesar de la similitud de ciertos procesos sociales y económicos en la región, las trayectorias partidarias han sido extraordinariamente divergentes, con sistemas de partidos tradicionales que experimentaron una progresiva desintegración, hasta sistemas pocos organizados que lograron notables niveles de institucionalización. Como sostiene Hicken y Riedl (2018), el escenario partidario latinoamericano continúa mostrando debilidades significativas en términos de desinstitucionalización y desestructuración

programática, acercándose, a nivel comparado, a otras regiones en desarrollo. Dentro de este escenario, son pocos los sistemas de partidos latinoamericanos que han exhibido estabilidad y continuidad institucional, siendo Chile uno de los casos excepcionales. Como se verá a continuación, históricamente Chile desarrolló un sistema de partidos notablemente cercano a los países europeos, sobre todo en la formación de los clivajes religioso y de clase. Sin embargo, esta característica no ha prevenido que el sistema de partidos chilenos no atravesara importantes transformaciones a partir de los 1990, tal como ha ocurrido a nivel más general en el continente.

1.1.3 Clivajes en el desarrollo político chileno

Si en el estudio de los sistemas de partidos latinoamericanos la capacidad explicativa del modelo de clivajes ha sido relativa, en el caso de Chile es como una de las principales teorías para analizar su desarrollo político. Con un sistema de partidos organizado en bloques de derecha, centro e izquierda, cuyos partidos expresan claras divisiones religiosas y de clase, el caso chileno es considerado como uno de los más similares al de los países europeos occidentales (Scully, 1995; Lechner, 2014). En este sentido, en el caso chileno el modelo entrega un marco de interpretación especialmente útil para analizar la evolución de su sistema político y de partidos, sobre todo en lo referido al clivaje de clase.

A continuación se revisan los principales estudios sobre clivajes en Chile, los que se enfocan principalmente en dos momentos del sistema de partidos. En primer lugar, el modelo de clivajes es empleado para explicar el sistema de partidos previo a 1973, con especial énfasis en su configuración tripartita y el papel que desempeñaron los partidos de centro. En segundo lugar, dichos clivajes históricos fueron reevaluados luego de la transición a la democracia al proponerse la hipótesis de un nuevo alineamiento político. En este sentido, el sistema de partidos chileno no está ajeno a los procesos de transformación partidista del resto de la región desde 1980 y que, como se revisó en la sección anterior, son considerados como una nueva coyuntura crítica.

Dentro del primer conjunto de trabajos, el estudio de Timothy Scully (1992) constituye el análisis más acabado del desarrollo del sistema de partidos chilenos desde el modelo de clivajes políticos. A partir del concepto de coyuntura crítica propuesta por Collier y Collier (1991), Scully (1992: 11). argumenta que “la evolución del sistema de partidos chileno en el siglo XIX y XX puede entenderse parcialmente como un legado de la manera en que tres fisuras sociales básicas –el conflicto religioso, el de la clase urbana y el de la clase rural– se polarizaron en tres momentos históricamente distintos”. Este proceso de estructuración partidaria generó un sistema tripartito, rasgo característico del caso chileno, en que las divisiones de clase, primero urbana y luego rural, desplazaron durante el siglo XX a la tradicional disputa clerical-anticlerical. Para Scully, la particularidad de este proceso se encuentra sobre todo en la forma en que el centro político se reconstituyó

en las sucesivas fisuras, dando origen a diversos partidos de centro, el Liberal, Radical, y la Democracia Cristiana, que estructuraron el sistema de partidos en tercios durante cada clivaje. En este sentido, el énfasis del autor está puesto en la importancia del centro político. Este bloque, “lejos de ser de poca importancia, ha sido un protagonista principal desde los comienzos del sistema de partidos y a lo largo de su extensa historia” (1992: 24-25), pues permitió moderar y articular a los demás partidos, y hacer viable el multipartidismo del sistema chileno. Solo con el paso hacia un centro programático e ideológico como lo fue la Democracia Cristiana en la década de 1960, dicha capacidad moderadora se vería socavada dando paso a una creciente polarización.

En una línea similar, otros estudios han profundizado y complementado la interpretación de los clivajes partidarios tradicionales en Chile. Por ejemplo, los trabajos de Arturo Valenzuela (1978, 1985) abordan la formación de los sistemas de partidos y sus clivajes en relación con el sistema político y el proceso que desembocó en el golpe de Estado de 1973. En la interpretación de Valenzuela, el sistema de partidos chileno se estructuró a partir de tres dimensiones de conflicto: centro-periferia y clerical-anticlerical durante el siglo XIX, y luego una división de clase entre izquierda-derecha en el siglo XX. Así, estos clivajes dieron origen a un multipartidismo caracterizado por su alta competitividad y polarización. Adicionalmente, los partidos chilenos exhibieron marcadas diferencias programáticas que abarcaban la totalidad de los conflictos socioeconómicos y religiosos, contaban con amplias bases sociales y sólidas subculturas políticas. No obstante estos rasgos, Valenzuela (1985: 25) destaca al mismo tiempo que el sistema de partidos chileno se caracterizó “por la estructuración de compromisos y cooperación con el fin de alcanzar objetivos políticos conjuntos y responder a las peticiones de los electores”. Esto fue posible gracias a la importancia de las elecciones y las instituciones representativas que permitían la negociación entre partidos y la formación de coaliciones, pero, sobre todo, como sostiene Scully, al rol de los partidos de centro que servían como puentes entre los extremos del sistema.

Otro análisis significativo de los clivajes es el planteado por Julio Samuel Valenzuela (1995), quien, además de considerar los clivajes clerical-anticlerical e izquierda-derecha, examina las sucesivas configuraciones internas del sistema de partidos chileno. De acuerdo con el autor, la superposición de ambas dimensiones políticas en distintos momentos de la evolución partidaria, “cada una con sus extremos y un enfoque moderado o centrista, genera un campo de tendencias políticas con nueve combinaciones potenciales de las varias posiciones que los partidos pueden adoptar” (Valenzuela, 1995: 77). Desde este punto de vista, el sistema de partidos chilenos aparece más fragmentado, con partidos que considerados individualmente sería menos fuertes de lo que comúnmente se reconoce. En efecto, como muestra el análisis de Valenzuela, fuera de los grandes bloques de izquierda, centro y derecha, los partidos de una misma tendencia han competido por el apoyo de grupos sociales similares, exhibiendo una menor lealtad

electoral en tanto partidos individuales, e impidiendo que una sola organización logre mayorías absolutas.

Respecto al segundo grupo de estudios, la discusión sobre clivajes tuvo especial relevancia a partir de la dictadura y la transición a la democracia en los años 90. Como en otros países latinoamericanos, el principal debate discurre en torno a la continuidad o ruptura que habría experimentado el sistema de partidos chileno durante el periodo autoritario. Desde un punto de vista favorable a la entonces eventual continuidad del sistema de partidos previo a 1973, Valenzuela y Valenzuela (1982: 601) pronosticaron tempranamente la permanencia de los partidos chilenos. A su juicio, estos se mostraban como “organizaciones notablemente persistentes y con profundas raíces en el tejido político del país”, y “a pesar de las dramáticas transformaciones en la función del Estado y de la privatización de la económica, esos partidos seguirán desempeñando funciones políticas clave en virtud de su anterior inserción en la trama de la vida nacional”. En contraste, Lechner (2014: 245) cuestionó dicha persistencia al sostener que la “continuidad no implica inmutabilidad”. “Aunque los límites identificatorios de los partidos entre sí se sigan inscribiendo en la línea derecha-izquierda”, era necesario observar los cambios políticos en términos culturales e identitarios. Es decir, “en qué medida persiste la antigua adhesión a las distintas posiciones en tal eje” y “en qué medida ha variado la significación de izquierda, centro y derecha”.

Luego de la transición a la democracia, este debate se organizó a partir de la hipótesis de que el sistema de partidos se habría reestructurado en torno a un nuevo clivaje cuyo eje central sería el de autoritarismo/democracia. Por un lado, algunos autores (Tironi y Agüero, 1999; Torcal y Mainwaring, 2003; Luna, 2008; Bonilla *et al.*, 2011; Aubry y Dockendorff, 2014) sostienen que la transición a la democracia iniciada con el plebiscito de 1988 transformó el sistema de partidos tradicional tripartito para dar paso a un sistema bipolar de coaliciones divididas por su apoyo u oposición al régimen dictatorial. De acuerdo con Tironi y Agüero (1999: 159, 166), “el cambio no radica tanto en los partidos (que siguen siendo básicamente los mismos del escenario anterior), como en su agrupación en dos coaliciones que actúan en la práctica como ‘macro-partidos’”. Esta sería una fisura eminentemente cultural que “se superpone a los quiebres históricos de carácter religioso y social que tuvieron sus orígenes a fines del siglo pasado y en el primer tercio de éste, dando forma al paisaje político previo a 1973”. En este sentido, Torcal y Mainwaring (2003) reconocen que, si bien el clivaje de clase persiste entre los partidos políticos chilenos, el principal factor de ordenamiento político tras la dictadura ha sido la agencia política de las élites, las que moldearon sistema de partidos entre quienes se muestran a favor y en contra del legado político del autoritarismo.

Por otro lado, diversos estudios defienden la continuidad del sistema de partidos previo a 1973, tanto en su organización en bloques de derecha, centro e izquierda, como en la persistencia de las divisiones religiosas y de clase (Scully, 1995; Valenzuela 1995, 1999; Raymond y Barros, 2011; Scully y Valenzuela, 1993; Valenzuela, Scully y Somma, 2007). Al decir de Valenzuela (1999: 282) en respuesta

a Tironi y Agüero (1999), el plebiscito de 1988 “no es una ‘fisura generativa’ comparable a las que históricamente conformaron el sistema de partidos chileno, sino que es el resultado de posicionamientos políticos dado el acontecer político”. Desde este punto de vista, la organización partidista posdictadura en dos grandes bloques corresponde más bien a una reorganización de los clivajes existentes a raíz de una situación política contingente, mas no un clivaje propiamente tal. Por cierto, esto no implica que estos autores no reconozcan los cambios experimentados por el sistema de partidos, pero estos serían menos profundos y más relacionados a la moderación ideológica de los partidos en contraste con la polarización del sistema previo a la dictadura (Valenzuela, Somma y Scully, 2018).

Por último, cabe considerar una serie de trabajos que, a la luz de transformaciones políticas posdictatoriales, han reevaluado desde una perspectiva más general algunas de las características que la teoría de clivajes le ha asignado al sistema de partidos chilenos, como su alta institucionalización, su estabilidad electoral y la organización en bloques ideológicos bien definidos. Por ejemplo, Montes, Mainwaring y Ortega (2000) matizan la supuesta fortaleza histórica de los partidos chilenos, los que, contrariamente a lo que suele afirmarse en la bibliografía, muestran una limitada penetración en el electorado, una persistente debilidad organizacional y, sobre todo, una alta volatilidad al interior de los bloques de derecha, centro e izquierda. Estas conclusiones son similares a las planteadas por Angell (2003), quien sostiene que las debilidades mostradas por los partidos a partir en la década de 1990 en términos de declive electoral y desafección partidista solo son tales cuando se las compara con el periodo de 1964-1973, de excepcional fortaleza organizacional e ideológica. Más recientemente, los trabajos de Luna (2008), Luna y Altman (2011) y Luna y Mardones (2010), han cuestionado la aparente fortaleza del sistema de partidos chileno contemporáneo, el que se caracteriza por sus débiles vínculos con la sociedad civil y debilidad programática, así como por la presencia sostenida de personalismos y candidatos independientes. Considerando estas investigaciones, los clivajes históricos en Chile serían mucho más débiles de lo que se sostiene.

Con todo, y a pesar de las debilidades indicadas, el sistema de partidos chilenos muestra hasta el momento notoria continuidad y persistencia. Si bien esto no implica que el sistema haya permanecido estático, en general los partidos tradicionales en el caso del centro y la izquierda, y los partidos formados a fines de la década de 1980 en el caso de la derecha, continúan siendo los actores predominantes del sistema de partidos. Y si bien algunos autores han planteado la posibilidad de nuevas líneas divisorias relacionadas a las funciones redistributivas del Estado (Castillo, Madero-Cabib y Salamovich, 2013), o bien de un nuevo clivaje articulado a partir del rechazo a la mercantilización de la educación expresado en las protestas estudiantiles del 2011 (Avendaño, 2014), el carácter histórico de la teoría de clivajes impide pronosticar con certeza la continuidad o cambio a partir de hechos aún contingentes. A pesar de ello, los clivajes sí han entregado un marco de interpretación particularmente útil para comprender la historia de los partidos

chilenos previa a 1973, periodo que exhibió, como se ha enfatizado en esta sección, una considerable similitud a los casos europeos.

En lo que respecta a esta investigación, las interpretaciones disponibles sobre los clivajes en Chile refuerzan la utilidad de este modelo analítico para el estudio de caso que aquí se aborda. El análisis de los clivajes políticos resulta especialmente provechoso considerando las similitudes que tanto las democracias europeas como Chile mostraron en la estructuración partidaria del conflicto de clase, eje divisorio que se tornó predominante a partir de la primera mitad del siglo XX. En este sentido, la conformación de un campo socialista en Chile como expresión de la naciente división política de clase siguió los patrones generales de los sistemas de partidos europeos occidentales, con fuertes partidos socialdemócratas y, en algunos casos, comunistas. Durante el resto del siglo, esta configuración partidaria constituyó la base del eje izquierda-derecha que caracterizó a los sistemas de partidos europeos y chileno. Pero, al mismo tiempo, el contraste con la mayoría de los países de América Latina refuerza la problemática inicial de esta investigación. En efecto, la literatura disponible sobre los sistemas de partidos latinoamericanos demuestra que el clivaje de clase tuvo otras vías de politización, las que rara vez dieron lugar a partidos exitosos con una clara organización en torno al conflicto clasista, hayan sido socialistas o de otro tipo. En este sentido, ¿cómo explicar que en Chile el clivaje de clase resultara en un sistema de partidos similar a los europeos, con partidos claramente ubicados en la izquierda política y con claras definiciones ideológicas de tipo socialista? Parte central de la hipótesis de esta investigación mantiene que dicho resultado se explica por el factor ideológico, es decir, por la forma en que los grupos socialistas, en sus diversas corrientes, interpretaron y canalizaron el conflicto de clase a comienzos del siglo XX.

No obstante, abordar la dimensión ideológica requiere un marco analítico distinto a los que usualmente se han utilizado en el estudio de los clivajes políticos. A este respecto, dos son las debilidades presentes en la bibliografía. En primer lugar, la gran mayoría de los estudios se encuentran abocados a evaluar la evolución de los clivajes, en desmedro de un análisis histórico de sus procesos de formación. En segundo lugar, metodológicamente dichos estudios se encuentran restringidos casi exclusivamente a métodos cuantitativos. Como aproximación alternativa a los clivajes, en lo que resta de este capítulo se propone una definición de ideología de tipo cualitativa, centrada en sus aspectos conceptuales, discursivos e históricos y que permitiría explicar el proceso de formación de los clivajes desde el punto de vista de los actores involucrados.

1.2 Ideología, lenguaje y acción política

En esta sección se plantean las consideraciones teóricas y metodológicas para el estudio de la dimensión ideológica de los procesos de formación de clivajes. Como se mostró en la sección anterior, el modelo de clivajes se ha empleado para estudiar, con distintos énfasis, los procesos políticos y de formación partidaria en Europa,

Latinoamérica y Chile. Sin embargo, salvo algunas excepciones notables como las investigaciones de Przeworski y Sprague (1986) y Bartolini (2000) en el caso del socialismo europeo, Collier y Collier (1991) para América Latina y Scully (1992) en Chile, la mayoría de los trabajos revisados no incorporan un análisis detallado o sistemático de la ideología. Esto no implica necesariamente que la ideología sea una dimensión ignorada, pues varias de estas investigaciones la consideran en mayor o menor medida como variable explicativa. No obstante, debido a que el foco de las investigaciones sobre clivajes está puesto principalmente en la observación empírica del comportamiento electoral e institucional, las ideologías suelen estar limitadas al análisis cuantitativo. En consecuencia, no logran mostrar de modo adecuado cómo las ideologías moldean, canalizan, y estructuran la politización de los conflictos sociales en partidos políticos. Es decir, por un lado, cómo determinados sistemas de creencias e ideas políticas –generalmente organizadas en familias ideológicas como socialismo, conservadurismo, liberalismo, etc.– ofrecen marcos de interpretación que problematizan, organizan y prescriben soluciones a los conflictos sociales y políticos. Por otro lado, cómo los sujetos utilizan y adaptan las ideologías en la formación de sus identidades políticas, sus modos de organización, la elaboración de estrategias y, en general, en la actividad política contingente.

Considerando lo anterior, a continuación se propone una definición de ideología que permita observar dichos procesos y fenómenos, y así explicar el contenido y el funcionamiento de las ideologías dentro de los procesos de formación partidaria. Siguiendo el mapa sobre el estudio de las ideologías de Leader Maynard (2013), esta propuesta se distancia de las aproximaciones cuantitativas, para centrarse en las aproximaciones conceptuales y discursivas, cuyas herramientas metodológicas resultan más adecuadas para el estudio de los clivajes desde la perspectiva propuesta. En lo que sigue, se presenta una definición de ideología sustentada en dichas aproximaciones que se organiza en tres secciones. En primer lugar, se presenta el concepto de ideología a utilizar en la investigación a partir de una exposición de los principales enfoques que abordan las ideologías como un fenómeno posible de ser estudiado y analizado históricamente a través de sus configuraciones conceptuales y discursivas, así como en sus dimensiones prácticas y sociales. En segundo lugar, se profundiza en la dimensión lingüística común a las aproximaciones conceptuales y discursivas a partir de una función central de las ideologías: la disputa por los significados y conceptos que se utilizan para interpretar políticamente la realidad social. Es decir, el conflicto inherente a los clivajes se estudiará como una disputa que ocurre también en el lenguaje y el discurso político. Por último, se aborda la relación entre el lenguaje político con su realidad social, examinando su influencia e independencia de su contexto material e institucional, y las limitaciones que este contexto le impone, problemática común a la gran mayoría de las aproximaciones al estudio del socialismo.

1.2.1 Una aproximación conceptual-discursiva a las ideologías

Dentro del conjunto de investigaciones revisadas en las secciones previas, numerosos estudios incluyen la ideología como una variable explicativa estudiada principalmente desde las aproximaciones cuantitativas. Como señala Leader Maynard (2013: 310), los enfoques cuantitativos tienen como principal objetivo identificar las relaciones causales entre las ideologías y el comportamiento político más que analizar su contenido, por lo que proporcionan una representación mínima del concepto. En efecto, la ideología suele ser reducida a categorías binarias como izquierda-derecha, estado-mercado, liberal-conservador, etc., o bien en términos de escalas o mediciones. En este sentido, como señala el mismo autor, los análisis cuantitativos tienden a evitar el análisis de “cómo las creencias de todo tipo de diferentes actores políticos se relacionan entre sí” (Leader Maynard, 2013: 310), es decir, “no abordan directamente el proceso de razonamiento político (...), sino que solo aborda el producto de ese proceso, las actitudes finalmente expresadas” (Rosenberg, 1988: 42). Una crítica similar se encuentra en Przeworski y Sprague (1986: 7), quienes sostienen que, en el caso de los clivajes de clase, los estudios suelen reducir las relaciones sociales a “una distribución estadística de rasgos individuales”. Una aproximación de ese tipo, añaden, pasa por alto que la adhesión política de clase resulta de un proceso de “forjar identidades colectivas, de movilizar compromisos a proyectos particulares por el futuro”. Los votos serían la última fase de dicho proceso. Incluso aquellos trabajos que profundizan o amplían el análisis de la ideología a través del estudio de los valores (Inglehart, 1971; Van Deth y Scarbrough, 1998), de la dimensión cultural (Bartolini, 2000), del resultado del conflicto político (Bornschiefer, 2010), o del estudio de documentos programáticos (Budge *et al.*, 1987), no evitan del todo las limitaciones de las metodologías cuantitativas.

En contraste con estas aproximaciones, esta investigación propone una definición de ideología centrada en su contenido y su funcionamiento, para comprender los modos en que los sujetos históricos construyen y emplean colectivamente los preceptos ideológicos que guían su acción política. Si bien se reconoce la gran amplitud y complejidad de esta categoría, cuyas numerosas definiciones disciplinarias pueden resultar incluso contradictorias (Eagleton, 1991), aquí se opta por la estrategia delineada por Humphrey (2005: 277). El autor sugiere que, en lugar de adoptar definiciones mediante estipulación o basadas en usos históricos, el concepto de ideología debería definirse a partir de qué es lo que se busca explicar y comprender con su uso. Por ello, este trabajo entiende a las ideologías como una forma de pensamiento político de carácter ubicuo, compuesto por un conjunto de creencias y representaciones sociales colectivas (pertenecientes siempre a grupos ideológicos). Estas representaciones proporcionan a los sujetos marcos de interpretación de la realidad, con nociones y principios sobre cómo debiese organizarse la sociedad y pautas de acción para actuar acorde con dichos principios.

Esta definición amplia de ideología se construye a partir de elementos postulados en diversas disciplinas y enfoques que, en términos generales, corresponden a lo que Humphrey (2005: 227-230) denomina una tradición teórica “inclusiva” de la ideología. En contraste con su versión “restrictiva”, más preocupada de sus efectos ilusorios, de ocultamiento de la realidad y de su función de dominación, las definiciones de la tradición inclusiva comparten tres elementos centrales. En primer lugar, abandonan la posición epistemológica que considera la ideología como un falseamiento de la “verdadera” naturaleza del orden social. Segundo, descartan la visión de la ideología como una herramienta de dominación de clase, ampliando el análisis a otros grupos sociales subordinados. Por último, estas aproximaciones expanden el alcance del análisis más allá de la “distorsión ideológica” para concentrarse en otras expresiones políticas y lingüísticas del fenómeno.

Tomando como base esta concepción inclusiva de la ideología, la definición aquí propuesta se nutre de los aportes de dos conjuntos de aproximaciones al campo del análisis ideológico: las conceptuales y discursivas. Por un lado, dentro de las aproximaciones conceptuales, se recurre principalmente al enfoque de análisis morfológico, desarrollado por Michael Freeden, y al enfoque de la historia intelectual asociada a la escuela de Cambridge, donde destacan por sobre todo los trabajos Quentin Skinner y J. G. A. Pocock, entre otros. Por otro lado, se consideran en términos amplios las contribuciones al estudio de las ideologías desde el análisis del discurso. Si bien es cierto que al recurrir a un variado conjunto de enfoques disciplinarios se corre el riesgo de obviar sus distintos fundamentos teóricos, más que considerarlos como paradigmas rígidos, se sigue la sugerencia de Leader Maynard (2013: 300, 314) de abordarlas como *clusters* de prácticas metodológicas que sirven como herramientas útiles para analizar el tema de este estudio. Desde esta perspectiva, los enfoques revisados a continuación comparten una visión no-peyorativa de las ideologías, entendiéndolas como un elemento necesario para toda formación social. Estas se expresan principalmente a través del lenguaje político y cuyos principales agentes son las organizaciones políticas, siendo posible de aplicarse a los estudios históricos y de los discursos sociales.

Aproximaciones conceptuales

Siguiendo a Norval (2000: 317), las aproximaciones conceptuales se caracterizan por su intención de “reestablecer la legitimidad de la ideología como un fenómeno abierto a un análisis político serio”, diferenciándolas tanto de la teoría política normativa como del análisis cuantitativo. A su vez, comparten un particular interés por el estudio del pensamiento e ideas políticas que se expresan en el lenguaje y el debate político, enfocándose en los usos y significados dados por las personas a los conceptos, términos y vocabularios políticos de una época. En este sentido, las herramientas metodológicas planteadas desde estos enfoques apuntan a analizar las ideologías a través del “estudio y comprensión de las unidades del pensamiento

político”, es decir, “aquellos conceptos políticos fundamentales que moldean el debate político” (Freeden, 1996: 14). Así, tanto el análisis morfológico como la historia intelectual ven en el entramado lingüístico de un colectivo humano el marco de sentido de la realidad social y el sustento de sus prácticas que constituyen, en definitiva, una visión ideológica del mundo.

Dentro de estos enfoques, la propuesta más elaborada del concepto de ideología se encuentra en el análisis morfológico desarrollado por Michael Freeden (1996). El propósito del autor consiste en restituir el valor analítico de esta categoría frente a su concepción peyorativa postulada principalmente desde el marxismo, con una definición que permite examinar el contenido de las ideologías a partir de sus configuraciones conceptuales tal como se observan y elaboran en los debates políticos contingentes. Así, define las ideologías en términos neutros, como una forma particular de pensamiento político ubicuo, vinculado a grupos sociales, y que desempeña un amplio rango de funciones de legitimación, integración, socialización, ordenamiento y simplificación del mundo social. En este sentido, las ideologías están orientadas a la acción de los sujetos y, en consecuencia, inevitablemente asociadas al poder, pues en tanto estas “justifican ciertas decisiones políticas e incentivan la acción política, evocan el poder como la influencia y dirección de los seres humanos” (Freeden, 1996: 22-23).

Si bien el foco central de Freeden está puesto en el análisis mismo de los conceptos, dicho análisis conceptual se relaciona directamente con el funcionamiento de las ideologías como mapas de sentido de la realidad. Para el autor, las ideologías consisten en *clusters* de conceptos que definen y aseguran ciertos significados a los términos particulares que las componen. De este modo, las configuraciones conceptuales ideológicas previenen la excesiva fluidez y ambigüedad propia del lenguaje político, proveyendo un mapa de significados que permite tomar decisiones políticas y “navegar” a través del mundo social. Desde esta perspectiva, las ideologías cumplen el rol no solo de representar dicho mundo social, sino de hacerlo comprensible e inteligible, elemento común a varias definiciones del concepto. Las ideologías, en tanto mapas de significados, tienen como función “ofrecer un nivel manejable de simplificación, incluso de Gestalt”, sin el cual el mundo se torna confuso y nuestra capacidad de seguir acciones individuales o colectivas se ve puesta en riesgo (Freeden, 2017: 119-120). Cabe indicar en este punto que, aunque las diversas ideologías particulares ofrecen diversas visiones de mundo que enfatizan o disminuyen ciertos aspectos de la realidad social, ello no es interpretado por Freeden como un falseamiento. Por el contrario, si bien las ideologías pretenden “minimizar” lo más posible el rango de significados e interpretaciones posibles del lenguaje, lo cierto es que los conceptos políticos siempre mantienen un nivel de indeterminación y ambigüedad que hace imposible su cierre. Ciertas ideologías pueden volverse predominantes, pero siempre se mantienen en disputa y competencia con otras rivales que pueden, eventualmente, imponer sus propias definiciones conceptuales.

Aunque sin el mismo nivel de sistematicidad en el uso del término, y desde una perspectiva metodológica propiamente historiográfica, la historia intelectual desarrollada por la llamada Escuela de Cambridge ha planteado una visión complementaria con el análisis morfológico, centrada en el estudio de los lenguajes políticos pasados. Si bien este enfoque engloba a numerosos autores, acá serán referidos principalmente los trabajos de Skinner y, en menor medida, Pocock, cuyas contribuciones continúan siendo altamente influyentes en el campo historiográfico. En el caso de Skinner, su trabajo ha estado motivado por el propósito de desarrollar una metodología más adecuada para analizar el pensamiento político histórico. Distanciándose del estudio de los grandes conceptos y autores canónicos, su propuesta se centra, en cambio, en la interpretación de los textos y discursos políticos a partir de las intenciones de sus autores, las que solo pueden comprenderse mediante una reconstrucción de sus contextos lingüísticos más amplios (Skinner, 2007). Es precisamente este contexto lingüístico el que remite al campo de la ideología en tanto provee “la matriz intelectual y social” en la que se desenvuelven los agentes históricos y que establece sus posibilidades y límites de acción. Es decir, de modo análogo al método de Freedman, el lenguaje político entrega un marco de interpretación del mundo que fija las pautas de su acción, pues “al recuperar los términos del vocabulario normativo de que dispone cualquier agente para la descripción de su comportamiento, al mismo tiempo estamos indicando uno de los frenos a su propio comportamiento” (Skinner, 1985: 11). Cabe añadir, como señala Tully (1988), que esta función ideológica es exitosa en la medida en que un determinado lenguaje político alcanza un cierto nivel de convención social que le da su preeminencia en un determinado contexto intelectual. No obstante, y al igual que en el análisis morfológico, dicha convención no es fija, sino que puede ser modificada a través de los nuevos usos que un agente puede dar a los términos clave del vocabulario político.

Esta concepción del lenguaje político contiene numerosos puntos en común con la aproximación de J.G.A. Pocock. En contraste con enfoques que tienden a abstraer el pensamiento político a sus niveles teóricos más altos, Pocock (2011: 30) entiende el pensamiento político como “el lenguaje de discusión política” utilizado por los agentes históricos. El autor se interesa por el vocabulario político utilizado por una sociedad determinada que constituye la base de su acción política, analizando los modos en que se crítica o legitima el comportamiento político, los símbolos y principios que se invocan, y en “qué lenguaje y mediante qué formas de argumentación buscan alcanzar sus propósitos” (Pocock, 2011: 31). En este sentido, la existencia de un vocabulario que sirve como el marco de discusión política de una sociedad bien podría entenderse como ideología en el sentido en que Skinner lo define, como el marco intelectual de una comunidad política. En suma, la historia intelectual provee una comprensión amplia de las ideologías al centrarse en las diversas creencias, actitudes, sistemas filosóficos, prejuicios e ideas que, al decir de Skinner, constituyen las instancias particulares de su objeto de estudio más general, el pensamiento pasado (Skinner, 1985: 50).

Aproximaciones discursivas

El segundo conjunto de aproximaciones, las discursivas, proponen una visión alternativa de la ideología que tiene importantes puntos de encuentro con las aproximaciones conceptuales. No obstante, el énfasis de las aproximaciones discursivas está puesto en las prácticas comunicativas a través de las cuales se constituye y transmite la ideología, estando menos preocupadas de su contenido y configuración conceptual (Leader Maynard, 2013: 304). A un nivel general, la teoría del discurso puede definirse, de acuerdo con Howarth y Stavrakakis (2000: 3-4), como el estudio del “modo en que las prácticas sociales articulan y disputan los discursos que constituyen la realidad social”, entendiendo los discursos como “sistemas de prácticas dotadas de significado que forman las identidades de objetos y sujetos”. O bien, en términos más amplios, como “un modo particular de comprender y hablar acerca del mundo” (Jorgensen y Phillips, 2002: 1). Bajo estas definiciones, se observa que el concepto de discurso comprende algunas características de la ideología, al postular la necesidad de estudiar las representaciones o concepciones lingüísticas que articulan la comprensión de la realidad.

Sin embargo, el campo del análisis del discurso comprende un vasto conjunto de enfoques y disciplinas, en donde el concepto de discurso no necesariamente es relacionado o asimilado al de ideología. Si bien el análisis del discurso se organiza en diversas teorías y corrientes, entre las que destacan el *Critical Discourse Analysis*, el posestructuralismo, la teoría posmarxista, la psicología discursiva, entre otras, la selección de enfoques a utilizar en esta investigación se basa principalmente en la inclusión de la ideología en el marco del análisis discurso. En este sentido, las dos principales aproximaciones que se consideran a continuación son la de Stuart Hall y Teun van Dijk, quienes, con distintos énfasis, han integrado significativamente el análisis ideológico con el discursivo. Igualmente, aunque sus herramientas metodológicas no serán utilizadas en este trabajo, se consideran sucintamente los enfoques de Norman Fairclough, Laclau y Mouffe, cuyos trabajos, sobre todo de estos dos últimos, han delineado la teoría del discurso y la ideología. A grandes rasgos, estos autores se ubican dentro de las corrientes de los estudios culturales (Hall), el *Critical Discourse Analysis* (Van Dijk y Fairclough) y el posmarxismo (Laclau y Mouffe). Pese sus diferencias, estas corrientes comparten una concepción del discurso entrelazada con la ideología en tanto producen “significados y marcos que influyen las prácticas sociales” (Leader Maynard, 2013: 305).

Dentro de esta perspectiva general, la obra de Stuart Hall presenta una concepción de discurso estrechamente ligada a la categoría de ideología. A partir de una relectura de Louis Althusser, Hall busca explicar lo que denomina el problema de la ideología, es decir, “las maneras en que ideas de diferentes tipos sujetan las mentes de las masas y, de ese modo, llegan a ser una fuerza material” (Hall, 2010: 134). Desde esta perspectiva, Hall entiende por ideología “los marcos mentales –los lenguajes, los conceptos, las categorías, la imaginación del pensamiento y los sistemas

de representación– que las diferentes clases y grupos sociales utilizan para entender, definir, resolver y hacer entendible la manera en que funciona la sociedad”. La definición remite, entonces, a la relación entre discurso y poder, al analizar los lenguajes que sustentan ciertas formas de dominación, pero también de resistencia. Aunque en este sentido su aproximación posee un carácter crítico, esta no consiste en esclarecer una supuesta distorsión ideológica, sino más bien en examinar las concepciones de mundo de los grupos sociales en conflicto. En vista de ello, el análisis mismo no supone un juicio sobre lo verdadero y lo falso, sino un examen de los marcos mentales en su expresión lingüística y práctica, pues “el lenguaje y la conducta son los medios (...) del registro material de la ideología, la modalidad de su funcionamiento” (Hall, 2017: 176). Como se verá luego, esta concepción resulta particularmente relevante al analizar la disputa ideológica como una disputa *de y en* el lenguaje, cuestión que Hall considera como una característica central de la lucha política.

En una corriente distinta, Van Dijk (1999; 2006) propone una teorización conceptualmente más ambiciosa sobre la ideología. A través de una propuesta multidisciplinaria, Van Dijk analiza los sistemas de creencias a partir de un triángulo conceptual que integra la cognición, la sociedad y el discurso. Así, el autor considera las ideologías como sistemas de ideas correspondientes “al campo simbólico del pensamiento”, pertenecientes a grupos e instituciones que se expresan en “prácticas sociales”, las que a su vez se articulan por medio de discursos “que explican, defienden, legitiman, motivan o, de algún modo, ‘formulan’ fragmentos de las ideologías subyacentes” (Van Dijk, 1999: 18-19). En esta relación, las ideologías son definidas como “la *base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo*”, que “les permiten a las personas, como miembros de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, *según ellos*, y actuar en consecuencia” (Van Dijk, 1999: 21). Cabe destacar que, en contraste con las aproximaciones conceptuales, las ideologías no son igualadas directamente a su expresión lingüística, sino que son “la *base ‘axiomática’ de las representaciones sociales*” (1999: 163) y, en tanto cognición, su función es dar coherencia a las creencias grupales para sus usos cotidianos y especificar los valores culturales del grupo (Van Dijk, 2006: 116). A pesar de ello, en términos generales esta propuesta coincide con las otras aproximaciones acá revisadas al tener como principal objeto de análisis las manifestaciones lingüísticas y conceptuales de la ideología.

Por último, cabe considerar dos enfoques significativos dentro del análisis del discurso en relación con la ideología, los de Fairclough, y Laclau y Mouffe. Si bien estos autores desarrollan técnicas y categorías metodológicas específicas, cuya aplicación se aleja de la propuesta de análisis planteada en esta investigación, teóricamente sus enfoques son importantes dentro del estudio de los discursos y refuerzan en algunos sentidos las concepciones de ideología acá revisadas. En el caso de Fairclough, su acercamiento al discurso se caracteriza por enfatizar su relación con las prácticas sociales. En efecto, Fairclough (1992: 63) entiende el uso

del lenguaje como una forma de práctica social, lo que implica que el discurso es “un modo de acción”, una forma en la que la gente “puede actuar sobre el mundo”, así como una forma de representación. En este sentido, las personas poseen “mapas mentales” del orden social que constituyen una posible interpretación entre muchas, pudiendo estar “política e ideológicamente” investidas en diferentes formas (1992: 82-83). De acuerdo con esto, el autor entiende las ideologías como “significaciones/construcciones de la realidad (el mundo físico, relaciones sociales, identidades sociales), que están integradas en las diversas dimensiones de las formas/significados de las prácticas discursivas” y que “contribuyen a la producción, reproducción o transformación de las relaciones de dominación” (1992: 87). Si bien este enfoque presta especial atención a las dimensiones estructurales de las ideologías y sus funciones de dominación, aspectos que exceden la propuesta teórica acá postulada, su definición permite enfatizar el desenvolvimiento práctico de las mismas. Toda ideología no solo “representa” un determinado ordenamiento social, sino que tiene como uno de sus propósitos centrales incidir sobre él, modelarlo y transformarlo de acuerdo con dichas representaciones.

En cuanto a la obra de Laclau y Mouffe, esta se caracteriza por la importancia dada al discurso como elemento constitutivo de las relaciones sociales, en tanto “todo objeto se constituye como objeto de discurso”, es decir, no hay objetos dados fuera de su formulación discursiva (Laclau y Mouffe, 1985: 107). Esta concepción supone, como señala Howarth (2000: 103-105), que los significados del discurso se encuentran siempre abiertos y posibles de ser actualizados, lo que no implica que se encuentren en una permanente indefinición, sino que son susceptibles de ser incorporados en construcciones políticas basadas en la construcción de antagonismos. En oposición al determinismo marxista, esto significa que las identidades políticas colectivas se constituyen a partir de formulaciones discursivas siempre contingentes que a través de la construcción de un “otro” antagonista, intentan representar la totalidad ausente de la comunidad. Es en este proceso en que se localiza la ideología, que produce una distorsión que es constitutiva de cualquier comunidad política al generar “la ilusión de un cierre” que es, no obstante, imposible (Laclau, 1996: 212). Si bien es cierto que, como señala Norval (2000), el enfoque de Laclau y Mouffe resulta complementario con otras propuestas, el estatus conceptual de la ideología permanece indeterminado. Autores como Geras (1987), Anderson (2017: 110-117) y Eagleton (1991: 218-219) han criticado precisamente el énfasis discursivo de este enfoque que, a juicio de este último autor, constituye un “inflación del lenguaje” que suprime cualquier diferenciación entre discurso y realidad material, característica que la distancia de la propuesta metodológica aquí planteada.

Habiendo considerado esta variedad de aproximaciones al concepto de ideología, es posible destacar las principales características que cada conjunto aporta a la definición planteada al inicio de esta sección. En primer lugar, las aproximaciones conceptuales permiten comprender el contenido de las ideologías desde una perspectiva histórica. Además, proporcionan herramientas

metodológicas para examinar las formaciones conceptuales, los significados y los usos de las ideologías como marcos lingüísticos o configuraciones de conceptos que proporcionan un ordenamiento y comprensión del mundo, así como el marco intelectual de las sociedades pasadas. Segundo, tanto las aproximaciones conceptuales como discursivas ponen el acento en la relación del lenguaje con las prácticas sociales de los grupos y sujetos. En ese sentido, los enfoques revisados profundizan en el análisis de los marcos de representación y las bases cognitivas que permiten a las personas desenvolverse en la realidad social. Esto permite tratar una diversidad de fenómenos como la formación de identidades, los modos de organización colectiva, las relaciones sociales y de poder, así como las formas de lucha y conflicto. Pero también, en un nivel más concreto, el énfasis dado a la expresión lingüística de las ideologías perfila los discursos y lenguaje como actos de habla que no solo dan cuenta del contenido de las ideologías, sino que son uno de sus principales medios de acción al incitar y definir un conjunto de prácticas ideológicamente guiadas.

Así, una característica fundamental de la aproximación a las ideologías aquí propuesta es su incidencia concreta en los procesos políticos, que se observa precisamente en los ámbitos señalados. En este sentido, como afirma Hall (2010: 176), “el lenguaje y la conducta son los medios, por decirlo así, del registro material de la ideología, la modalidad de su funcionamiento”, aspectos que son expuestos a continuación a partir de dos relaciones específicas. En primer lugar, se mostrará cómo las ideologías, en sus diversas expresiones lingüísticas, se caracterizan por efectuar un proceso de despolemización (*decontestation*) de sus contenidos conceptuales. Esto implica que parte significativa del conflicto ideológico es por el lenguaje, es decir, por los significados, conceptos y usos de un vocabulario político determinado. En segundo lugar se expondrá la relación entre ideología y acción política, en tanto toda práctica de grupos e individuos requieren un fundamento que les guía y, en tanto expresión en el lenguaje, permite impulsar e incitar a ciertos causes de acción de acuerdo con preceptos ideológicos particulares.

1.2.2 Despolemización y disputa por el lenguaje

Para que los marcos de representación ideológicos sean efectivos, se requiere que las ideologías sean un recurso “relativamente estable y liberado de contexto” (Van Dijk, 1999: 79), ofreciendo “mapas sociales mentales” accesibles a los diversos miembros de un grupo y presentándose a sí mismas como universales (Freeden, 1996: 30-31). Sin embargo, en la práctica cotidiana toda ideología se desenvuelve en contextos sociales complejos, compuestos por diversos grupos en conflicto y procesos históricos particulares (Van Dijk, 1999: 79), así como por varias otras ideologías rivales que ofrecen sus propias interpretaciones de la realidad. En vista de ello, su contenido se haya en constante tensión, conflicto y controversia. En consecuencia, el propósito de toda ideología es asegurar precisamente tanto su estabilidad interna como su pretensión de universalidad hacia otros grupos. Y dado

de que las ideologías se adquieren, expresan, representan y reproducen principalmente mediante el discurso (Van Dijk, 2006: 124), la búsqueda de estabilidad, coherencia, simplificación y universalidad se efectúa predominantemente a través del lenguaje. Así, como sostiene Norval (2000), una dimensión central para las aproximaciones contemporáneas al análisis de las ideologías es el proceso de despolemización (*decontestation*), es decir, cómo los discursos y representaciones ideológicas (no exclusivamente lingüísticas) se sedimentan, convencionalizan y logran cierta estabilidad en sus significados y estructuras conceptuales.

En esta sección se abordan algunos aspectos de la despolemización conceptual implicada en la formulación lingüística de las ideologías. Para ello, los enfoques conceptuales proporcionan aproximaciones especialmente relevantes en este ámbito, al concentrarse en los diferentes modos y niveles de expresión lingüística de las ideologías, así como en los usos que los propios agentes hacen del lenguaje en la lucha política. Dentro de estas aproximaciones, el análisis morfológico planteado por Freeden presenta una metodología centrada precisamente en la despolemización que intentan alcanzar las ideologías, estudiando cómo sus configuraciones y entramados conceptuales fijan y limitan sus posibles significados. Igualmente, autores como Pocock y Skinner centran su atención en los cambios de significados a partir de los usos que los agentes históricos hacen de los términos clave de una determinada época y sociedad. En este caso, la despolemización puede asociarse a los intentos de los ideólogos por legitimar ciertas prácticas sociales que pueden ser socialmente rechazadas o cuestionadas. Es decir, los sujetos deben disputar los significados y usos existentes del vocabulario político para establecer nuevos usos que sean socialmente aceptados. En términos más generales, este énfasis en la legitimación y la disputa por los significados también se encuentra en las aproximaciones discursivas, en tanto los conflictos entre grupos y las relaciones de poder se desenvuelven a través del lenguaje.

Desde la formulación conceptual de las ideologías, la importancia de la disputa por los significados es central en consideración de lo que Gallie (1956) denominó el carácter *esencialmente polémico* (*essentially contested*) de ciertos conceptos, sobre los cuáles no es posible alcanzar un acuerdo sobre su definición sin que sus múltiples formulaciones sean necesariamente incorrectas. Lo anterior es destacado también por Koselleck (2004: 85) para el estudio de los vocabularios sociopolíticos. De acuerdo con este autor, los conceptos políticos siempre poseen varios significados y deben retener un grado de ambigüedad para seguir siendo conceptos como tales. Esta ambigüedad puede ser objeto de clarificación, pero nunca puede ser eliminada totalmente. Siguiendo la línea de estos autores, Freeden destaca como características de los conceptos políticos su ambigüedad, indeterminación, vaguedad y carácter no conclusivo (*inconclusiveness*). En consideración de estos elementos, las ideologías son “intentos por limitar los múltiples significados que los conceptos políticos siempre poseen”, tratando de imponer “precisión” conceptual, la cual es necesaria para la toma de decisiones políticas (Freeden, 2017: 119-120).

Así, este enfoque postula el estudio de las ideologías a partir de su articulación en constelaciones o configuraciones conceptuales. Desde esta perspectiva, toda ideología despliega un conjunto particular de conceptos, los que adquieren significado no solo desde su dimensión histórica, sino por la interrelación entre ellos. A través de estos *clusters* conceptuales, las ideologías buscan limitar el rango semántico de los conceptos y, de esa forma, evitar las interpretaciones alternativas de las ideologías rivales.

Este el proceso de despolemización opera en distintos niveles de su estructura morfológica. Específicamente, la determinación de significados dependerá en gran medida de la posición y relación de ciertos conceptos dentro de cada ideología, los que, siguiendo a Freedon (1996: 77-79), pueden agruparse en tres categorías: conceptos nucleares (*core*), adyacentes y periféricos. Cada una de estas desempeña un rol particular dentro de una ideología, y el cambio o determinación de significados depende en gran medida de cómo estos distintos niveles se sostienen y definen mutuamente. El primer conjunto, los nucleares, corresponde a aquellos conceptos centrales e imprescindibles para toda ideología, y comúnmente corresponden a los grandes términos del vocabulario político moderno, tales como libertad, igualdad o justicia. No obstante, por su nivel de abstracción e importancia generalizada, estos términos suelen estar presentes en casi todas las ideologías, no siendo suficientes por sí mismos para darles su especificidad. En consecuencia, los conceptos nucleares requieren de una serie de conceptos adyacentes, que les permiten ser definidos en sentidos más específicos, dando a cada ideología su carácter distintivo. Esta interrelación presenta, por un lado, una adyacencia lógica, correspondiente a todos los componentes que lógicamente supone un determinado concepto. Sin embargo, por otra parte, en la práctica los conceptos no pueden sostener todos sus posibles significados y componentes, por lo que deben estar mediados culturalmente. Presentan, así, una adyacencia cultural que, por mediaciones históricas, geográficas y sociales, privilegia ciertos componentes por sobre otros y, de ese modo, hace viable a los conceptos nucleares (68-72). Por último, las ideologías despliegan un amplio rango de conceptos periféricos. Si bien no son esenciales para las ideologías y carecen de la sofisticación de los conceptos mayores, ponen en contacto a las ideologías con sus contextos culturales específicos y permiten establecer sus usos particulares en la práctica política cotidiana (78-80).

Este resumen de la morfología conceptual de las ideologías permite comprender en qué sentido cada ideología particular intenta despolemizar sus conceptos centrales. A través de esta estructura conceptual las ideologías constriñen el número potencial de significados que los principales términos de un vocabulario político dado pueden adoptar. De este modo, cualquier creencia dentro de una ideología dada se caracteriza “por una ruta particular (entre muchas otras posibles) desde el núcleo, a través de los conceptos adyacentes, hacia el perímetro, e igualmente por el movimiento inverso” (Freedon, 1996: 81). Mediante este mecanismo, las ideologías sirven como un puente entre el carácter polémico de los conceptos y la determinación de sus potenciales significados, “transformando la inevitable

variedad de opciones en la certeza monolítica que es la característica ineludible de una decisión política, y que es la base para la construcción de una identidad política” (76-77).

Sin embargo, la despolemización no opera solamente dentro de la estructura conceptual de las ideologías ni los conceptos son susceptibles de una modificación totalmente deliberada y libre. Por el contrario, dado el carácter histórico del vocabulario político, la despolemización ocurre también a partir del conjunto de significados establecidos y sedimentados en el tiempo. Siguiendo a Pocock (2011: 54), “los seres humanos se comunican entre sí por medio de un lenguaje que está formado por una serie de estructuras fijas e institucionalizadas”. Es decir, se conforma por una acumulación de actos de habla pasados y, por lo tanto, las intenciones de los hablantes están mediadas por “palabras surgidas de la sedimentación e institucionalización de lo que expresan otros cuyas intenciones e identidades puede que ya no conozcamos bien”. Así, los usos históricos del lenguaje, cuyas intenciones originales escapan al control de los hablantes presentes, imponen una restricción considerable a lo que puede ser legítimamente dicho. Sin embargo, esta fijación histórica de las palabras no es, una vez más, definitiva. El mismo Pocock reconoce que el lenguaje, como sistema institucionalizado, siempre es “bidireccional” y “ambiguo”. Si bien los significados pasados no pueden ser controlados a voluntad de un hablante en particular, siempre están a disposición del resto de la comunidad lingüística. En este sentido, “el lenguaje es una forma de comunicación política y de acción muy eficaz, no porque sea neutral, sino por lo relativamente incontrolable que es y lo difícil que resulta monopolizarlo” (2011: 56), permitiendo de ese modo un espacio de fricción y conflicto político por medio del lenguaje.

Disputa semántica

En vista de estas características, un aspecto crucial involucrado en el proceso de despolemización es el cambio semántico. El intento de establecer significados “correctos” o “definitivos” de los conceptos políticos solo cobra sentido en tanto se encuentran abiertos a múltiples interpretaciones y definiciones. La despolemización, entonces, refiere también a un proceso de constante disputa por el lenguaje, en el cual los actores políticos deben desafiar la aparente naturalidad del lenguaje político predominante de una determinada época. Desde una perspectiva similar a la de Pocock, el problema del cambio conceptual también ha sido abordado por Skinner desde los procesos de “redescripción retórica” (Skinner, 2007: 304-306). De acuerdo con el autor, la importancia de la disputa por el lenguaje se haya en que los desacuerdos sobre el mundo social surgen precisamente “en el nivel lingüístico”, es decir, son una disputa por la correcta aplicación de términos evaluativos a ciertas prácticas e instituciones sociales. Desde esta perspectiva, su atención está puesta en la función que cumplen las palabras “en la sustentación de filosofías sociales completas”, y más específicamente, en cómo los términos

evaluativos, en sus sentidos socialmente aceptados, son utilizados “como un modo apto para describir situaciones que hasta ahora no habían sido descritas en tales términos” (Skinner, 2007: 279; 282). En consecuencia, los debates políticos se refieren principalmente a un proceso de legitimación de ciertos cursos de acción política por medio del lenguaje.

En este ámbito Skinner destaca el papel que cumplen los “innovadores ideológicos” cuya tarea es la de legitimar alguna forma de comportamiento social que, en general, es cuestionada”. Es decir, aspiran a lograr “efectos tales como los de incitar, persuadir o convencer a los oyentes o a los lectores para que adopten un punto de vista nuevo” (Skinner, 2007: 254, 255). Es en este sentido en que Skinner se refiere a la redescipción retórica como parte del proceso de cambio conceptual, pues estos ideólogos deben “manipular” el lenguaje evaluativo existente, y hasta cierto punto despolemizado, para aplicarlo de un modo distinto a acciones socialmente cuestionadas. Mediante este proceso retórico es que “cualquier sociedad logra establecer, sostener, cuestionar o alterar su identidad moral” (2007: 255). Así, el conflicto político gira predominantemente en torno los usos establecidos del vocabulario político, pues los innovadores de la ideología para lograr su cometido “no tienen otra opción que la de mostrar que, al menos, algunos de los términos usados por sus adversarios ideológicos para describir lo que ellos admiran pueden aplicarse para incluir y legitimar su propio comportamiento aparentemente cuestionable” (2007: 256). De ser exitosos, los ideólogos pueden establecer nuevos usos de los conceptos políticos y, eventualmente, lograr la despolemización de los mismos, dando origen a un nuevo rango de términos y palabras que sustentan ese cambio retórico y social.

La disputa por el lenguaje es igualmente destacada en términos más amplios por algunas corrientes del análisis del discurso antes mencionadas. Stuart Hall, por ejemplo, cifra parte significativa de la lucha política en su expresión lingüística. Para Hall “el lenguaje es el medio por excelencia a través del cual las cosas se ‘representan’ en el pensamiento y, así, el medio en el que la ideología se genera y se transforma” (Hall, 2010: 143). Aún más importante, dado que las relaciones sociales y de poder pueden ser representadas de “forma diferente” por diversas ideologías, el lenguaje “no está fijado” con su referente, sino que “puede construir diferentes significados alrededor de lo que es, aparentemente, la misma relación o el mismo fenómeno social”. Esta apertura permite, entonces, la posibilidad de interpretar y definir un mismo conjunto de situaciones de diversas maneras dependiendo del lugar en que se sitúan los sujetos. En contraste con el determinismo económico cuestionado por Hall, esto significa, que si bien las personas existen en relaciones reales, “las relaciones económicas no pueden por sí solas prescribir una manera única, fija e inmutable de conceptualizarlas”, sino que pueden ser expresadas “dentro de diferentes discursos ideológicos”. En consecuencia, la explicación de un sistema social “está relacionada con conceptos, ideas, terminología, categorías, quizás también imágenes y símbolos (...) que nos permiten entender algún aspecto de un proceso social en el pensamiento” (Hall, 2010: 146-147).

Por su parte, Van Dijk señala la importancia que posee el discurso en su teoría cognitiva debido a su capacidad para “expresar o formular concretamente creencias ideológicas abstractas, o cualquier otra opinión relacionada con esas ideologías” (1999: 244). No obstante, ya que desde su enfoque el discurso es una expresión fragmentaria de creencias ideológicas más amplias, su concepción de la disputa por el lenguaje y la fijación de significados no está centrada tanto en el análisis conceptual o semántico, como más bien en la relación entre el discurso y ciertas o prácticas de poder. Dado que las ideologías pertenecen y responden a los intereses de grupos que suelen estar en conflicto, competencia o colaboración de acuerdo con sus posiciones de dominación o resistencia, la aproximación al lenguaje está perfilada desde el papel que desempeña en dichas relaciones. En este sentido, la disputa ideológica en relación con el discurso es enfatizada, como en el caso de Skinner, desde la función de *legitimación* de las ideologías.

De acuerdo con Van Dijk, la legitimación “se lleva a cabo, específicamente, por el texto o la conversación”, y se relaciona tanto a “una respuesta discursiva a un desafío a la propia legitimidad” como con “el acto de habla de defenderse a uno mismo”, es decir, proveer “buenas razones, fundamentos, motivaciones aceptables para acciones pasadas o presentes que han sido o podrían ser criticadas por otros” (1999: 318). Así, más que una disputa por el lenguaje, “los conflictos ideológicos y sociales (...) toman la forma de una lucha no solo por las ideas, o por recursos sociales escasos, sino también por la legitimidad” (1999: 322). Por tanto, esta disputa se efectúa en el discurso a través de la deslegitimación de grupos rivales por medio de diversas estrategias y dimensiones (semánticas, léxicas, retóricas, de estilo, etc.). Desde este punto de vista, el proceso de despolemización está en realidad implicado en uno más amplio de construcción de posiciones hegemónicas, ya que “si el discurso público de cualquier grupo social puede ser controlado o deslegitimado, un grupo dominante o competidor puede establecer la hegemonía sobre el campo simbólico, esto es, el control de los significados y las mentes de los receptores de ese discurso” (1999: 324). En consecuencia, si existe la posibilidad de determinar ciertos significados o usos, esta se relaciona con la posición que ocupen los grupos en un cierto orden hegemónico.

Pese a los diversos énfasis dados a las manifestaciones lingüísticas de las ideologías en las aproximaciones aquí revisadas, es posible afirmar que el estudio del lenguaje es un aspecto crucial para la aproximación propuesta. Las disputas por los significados, usos y la estabilidad conceptual del vocabulario político constituyen el motor de toda ideología. Sin un involucramiento activo en dichos procesos, las ideologías carecen de viabilidad. En este sentido, el lenguaje es “el vehículo del razonamiento, de la consciencia y del cálculo práctico por la manera en que ciertos significados y referencias han sido asegurados históricamente” (Hall, 2010: 148). Al tomar la definición de ideología propuesta en la sección anterior, parte del análisis de esta investigación muestra no solo cómo las ideologías proveen una visión particular de la realidad social, sino además los modos en que, a través del lenguaje,

interpretan los eventos, sucesos y problemáticas contingentes de acuerdo con sus principios y creencias ideológicas más generales.

Por último, si bien las aproximaciones discursivas se acercan al lenguaje desde una perspectiva diferente a las aproximaciones conceptuales, más preocupadas por el cambio conceptual y la reconstrucción histórica de los significados, ello no necesariamente implica que sus enfoques sean incompatibles. Antes bien, las aproximaciones discursivas enfatizan la relación entre ideología, discursos y prácticas involucradas en las relaciones sociales, particularmente entre grupos, ofreciendo así una visión complementaria sobre el funcionamiento de las ideologías. En este sentido, la siguiente sección aborda esta dimensión desde la relación entre ideología y acción política, aspecto estrechamente ligado a sus expresiones lingüísticas y discursivas. Como se ve más adelante, a un nivel general la propuesta de Van Dijk considera las ideologías como un elemento necesario para cualquier acción que emprendan los miembros del grupo, en tanto provee las creencias que les sirven de guía, sin las cuales no sería posible la coordinación entre sus miembros. Simultáneamente, a un nivel más específico, esta acción se asocia, nuevamente, con el lenguaje. En esto tanto las aproximaciones conceptuales como las discursivas coinciden en que el lenguaje o el discurso son, en sí mismos, una forma de acción. Pero, al mismo tiempo, el lenguaje ideológico se asocia a la acción en tanto es uno de los elementos constitutivos de las prácticas, costumbres e instituciones en la que los agentes históricos se desenvuelven cotidianamente.

1.2.3 Ideología y acción política

Una función ampliamente reconocida de las ideologías por sus diversos enfoques disciplinarios es su dimensión práctica y su para guiar la acción de los sujetos. Karl Mannheim, por ejemplo, sostenía en su estudio clásico sobre la ideología que una de sus principales preocupaciones era cómo el pensamiento funcionaba en la vida política como “un instrumento de acción colectiva”, asignándole como rol principal el “proveer una guía para la conducta cuando deben tomarse decisiones” (Mannheim, 1955: 1; 19). Desde el marxismo, el influyente artículo de Althusser sobre los aparatos ideológicos proponía como una de sus tesis centrales que toda ideología tenía una existencia material, es decir, las ideas tenían una existencia en los actos de los sujetos, que se encuentran inscritos en las prácticas definidas por el aparato ideológico del que proceden (Althusser, 2003: 141-143). Por su parte, el igualmente influyente trabajo de Clifford Geertz reconoce la necesidad de una guía ideológica para la práctica humana. Dado que la conducta humana es “en extremo plástica”, sostiene, las personas requieren de patrones simbólicos que puedan guiar y organizar su comportamiento. “Siendo agente de su propia realización, el hombre crea, valiéndose de su capacidad general para construir modelos simbólicos, las aptitudes específicas que lo definen”, es decir, “el hombre se hace (...) un animal político por obra de la construcción de imágenes esquemáticas de orden social” (Geertz, 1987: 190). Las ideologías, entonces, pueden considerarse un factor clave

en la comprensión de lo que las personas hacen en la práctica política cotidiana. No son simplemente un cuerpo abstracto de creencias, conceptos e ideas, sino que proporcionan las pautas de acción necesarias para cualquier grupo.

Considerando la importancia de esta dimensión, en esta sección se aborda la relación entre ideología y acción política tal como la conciben los distintos enfoques y autores revisados, tratándola en dos niveles. En primer lugar, a un nivel más general, y siguiendo a Van Dijk, las ideologías proporcionan las representaciones y creencias compartidas necesarias para la coordinación y organización de cualquier grupo ideológicamente relevante. En segundo lugar, la dimensión práctica del discurso, en el entendido de que el lenguaje político funciona a partir de actos de habla dirigidos a la acción. Es decir, las ideologías permiten la acción no solo porque comunican determinadas visiones de mundo, sino porque también inducen a la acción por medio del lenguaje para seguir ciertas pautas o líneas de acción específicas.

Respecto al primer punto, la aproximación cognitiva de Van Dijk proporciona un marco clarificador sobre la relación entre ideología y acción al integrar la dimensión social como un elemento necesario para su estudio. Al situar socialmente las representaciones ideológicas, la pregunta central que debe ser respondida es “*por qué* los actores sociales desarrollan y utilizan las ideologías” (1999: 175). En este sentido, el foco está puesto sobre los grupos y las relaciones de grupo, que pueden ser de dominación, poder y resistencia, y el rol que las ideologías desempeñan en dichas relaciones. Este papel de las ideologías, como señala el autor, suele ser enfatizado positivamente en el caso de los grupos dominados para “crear solidaridad, organizar la lucha y sostener la posición”. Pero en términos más amplios “las ideologías sirven para proteger los intereses y recursos”, o “de modo más neutro y general (...), las ideologías simplemente sirven a los grupos y a sus miembros en la organización y manejos de sus objetivos, prácticas sociales y toda su vida cotidiana” (1999: 178). Esto significa que las ideologías proporcionan las representaciones sociales necesarias que permiten a un grupo constituirse como tal y, en consecuencia, actuar colectiva y organizadamente. También, cumplen una función “coordinadora”, pues se desarrollan “para asegurarse de que los miembros de un grupo piensen, crean y actúen de tal modo que sus acciones redunden en su propio beneficio y en el grupo en general” (1999: 208). Así, el éxito de un grupo ideológico requiere que sus prácticas sociales se orienten precisamente a sus propios intereses, “y este problema de coordinación puede ser resuelto únicamente si los grupos comparten conocimiento, actitudes, normas, valores e ideologías específicos” (210).

Sin embargo, si bien esta función opera a un nivel cognitivo, como se ha mencionado su expresión principal se realiza mediante el discurso. Esto supone, por tanto, que el discurso mismo posibilita la realización de acciones. Desde esta perspectiva, el autor interpreta el discurso como de actos de habla, pues “emitir palabras y oraciones en el texto y la conversación, en una misma situación, específica, es también y al mismo tiempo, la realización de una gran cantidad de acciones sociales, además de la de participar en la interacción social” (Van Dijk,

1999: 263). Esta capacidad del discurso para impulsar la acción da cuenta, por tanto, de la intencionalidad del acto comunicativo, pues las personas “construyen modelos mentales de lo que quieren hacer (decir, escribir) en el contexto presente” y, por lo tanto, el discurso se produce “con el objetivo de realizar la intención y sus resultados representados” (1999: 272). En consecuencia, las intenciones funcionan como “antecedentes necesarios de la acción social”, y resultan un elemento fundamental para comprender el desenvolvimiento de los grupos y sus miembros en los procesos de lucha, conflicto, competencia y colaboración implicados en los procesos políticos y sociales. Estas acciones suponen, por parte de dichos grupos, planes de acción para llevar a cabo sus actividades de acuerdo con sus creencias, normas y valores ideológicos en contextos determinados.

Esta conceptualización del discurso como actos de habla ideológicamente fundamentados coincide con la propuesta planteada desde las aproximaciones conceptuales. La historia intelectual de la Escuela de Cambridge también ha profundizado y teorizado la acción política a través de la categoría de actos de habla. A partir de su crítica al estudio tradicional del pensamiento político que consideraba las ideas como entidades autónomas y abstractas, los historiadores de esta corriente postulan la necesidad de comprender lo que los agentes históricos pretendían realizar mediante sus declaraciones escritas o habladas. Así, tempranamente John Dunn (1968: 87) sostenía la importancia de acercarse al pensamiento como una actividad mediante la cual las personas buscan un ordenamiento coherente de su experiencia. Igualmente, Pocock (2011) se ha concentrado en lo que denomina la “verbalización del acto político”, mientras que Skinner (2007) se ha preocupado por la recuperación de las intenciones de los agentes históricos, es decir, qué es lo que querían hacer al decir algo. Es claro que esta comprensión del pensamiento político se encuentra estrechamente ligada a la disputa por el lenguaje antes descrita, en tanto parte de la acción apunta precisamente a cambiar los significados y usos de los conceptos. No obstante, y de manera complementaria, el énfasis acá está puesto tanto en las intenciones de los actores políticos como en las acciones que estos esperan incitar en otros.

De los autores mencionados, Skinner es quien más ha profundizado en esta dimensión de las ideologías. Junto con la recuperación de los significados a partir de los usos del vocabulario político, un segundo aspecto igualmente importante en su enfoque consiste en responder a la interrogante acerca de “qué habrán querido comunicar los autores al emitir sus enunciados, al escribir en la época en que escribieron para las audiencias específicas que tenían en mente” (Skinner, 2007: 160). Recurriendo a la formulación de John Austin, esto implica recuperar aquello que “el agente podría haber estado *haciendo* al decir lo que dijo”, es decir, entender lo que “habrá querido significar al emitir una expresión con ese preciso sentido y referencia” (2007: 187). En los términos del propio Austin, esta dimensión del acto de habla es conceptualizada como la fuerza ilocutiva del lenguaje. En este sentido, sostiene Skinner (2007: 188), “hablar con una cierta fuerza ilocutiva normalmente implica realizar un *acto* de cierto tipo que compromete una conducta deliberada y

voluntaria”, lo que involucra recuperar las intenciones de los agentes históricos. Estas intenciones se traducen en un amplio rango de actos de habla involucrados en el proceso de legitimación antes mencionado y que, en términos más generales, se pueden agrupar en aquellos dirigidos a recomendar o aprobar, o bien a condenar o criticar ciertas pautas de acción (Skinner, 2007: 254). En definitiva, a través del discurso las personas no solo comunican, sino que al mismo tiempo incitan a otros a seguir o adoptar un conjunto de prácticas ideológicamente guiadas. Sin esta intencionalidad ideológica, la acción política no sería viable ni efectiva.

Por cierto, esta relación entre pensamiento, lenguaje y acción no es exclusiva de la Escuela de Cambridge, sino que constituye un postulado compartido por diversas corrientes de la historia intelectual. En lo relativo a la acción política, el historiador francés Lucien Jaume ha conceptualizado más explícitamente la relación entre pensamiento y acción por medio de la categoría de *ideopraxia*, que define como “la puesta en práctica de un pensamiento político”. Esta categoría aplica principalmente a los textos de intervención política, los que se caracterizan por llevar “la huella de una acción”, es decir, están dirigidos a “exponer, convencer, discutir, polemizar o legitimar” (Jaume, 2004: 112). La interpretación de los textos como portadores de una acción entronca, en términos generales, con los otros enfoques discursivos y conceptuales, pues asigna al pensamiento expresado en el lenguaje una intención y una dimensión práctica. Así, “en la palabra del interviniente”, argumenta Jaume, “se encontrarán conjuntamente un contenido teórico y una incitación a la acción, la reunión de eso que se reparte a su vez entre el polo del pensamiento y el de la acción” (2004: 114). En esta línea, Jaume coincide notablemente con la interpretación del lenguaje en términos de actos de habla tal como postula Skinner y otros. Sintetizando su propuesta, el autor sostiene que “analizar los textos por los que discurre la controversia política (...) lleva a caracterizar lo político como una actividad que, dirigida hacia otros (...) intenta hacer compartir una serie de concepciones”, mediante las cuales “el actor político *incita a actuar*, por lo que el texto de intervención política es una acción que empuja a la acción” (2004: 119).

Las consideraciones revisadas sobre la acción política permiten comprender en qué sentido las ideologías tienen una manifestación práctica. Tanto en su dimensión cognitiva como en su expresión lingüística-discursiva, las ideologías proporcionan las herramientas y guías necesarias para que los grupos y sus miembros puedan actuar e incidir políticamente en sus contextos, eventos y situaciones particulares. La movilización política, la organización grupal, la definición programática y estratégica, la toma de decisiones, y todo el amplio rango de prácticas involucradas en el conflicto político son posibles gracias a los lineamientos prácticos de las ideologías. Éstos pueden mantenerse simplemente como creencias que guían la acción cotidiana, pero también pueden comunicarse con el propósito de llevar a cabo cursos de acción más específicos. Cabe aclarar que, en el sentido expuesto en la sección anterior, esta cualidad de las ideologías se vincula directamente con la necesidad de fijar y disputar los contenidos conceptuales y semánticos del vocabulario político. Pero a diferencia del proceso de despolemización, la dimensión

práctica de las ideologías se relaciona con la forma en que dichos conceptos son empleados para sustentar, recomendar, prohibir e incitar las acciones concretas que los actores políticos realizan. En cierto sentido, los intentos por establecer determinados usos y definiciones del aparatage conceptual de las ideologías pueden ser considerados como un proceso necesario para el desarrollo de acciones colectivamente organizadas. Visto de este modo, no es de extrañar que, en el estudio de caso de esta investigación, el despliegue más efectivo del socialismo se produjera luego de un periodo de relativa estabilización y clarificación conceptual entre sus diversas corrientes, lo que permitió que cada una adoptara medios de acción particulares y específicos. Así, un cierto grado de despolemización previo es requerido para realizar una acción efectiva, aunque en la práctica ambos procesos, definición conceptual y acción política, se entrecruzan y retroalimentan mutuamente.

Finalmente, en un nivel más general, resulta relevante considerar que las ideologías permiten el desenvolvimiento práctico de los grupos e individuos, en tanto sus manifestaciones lingüísticas resultan constitutivas de la realidad social. El lenguaje ideológicamente investido es un elemento necesario para la comprensión de la realidad, haciéndola inteligible y susceptible de múltiples interpretaciones. Para Fairclough, por ejemplo, el discurso no solo representa las estructuras extradiscursivas, sino que también es constitutiva de las mismas. “La ideología tiene efectos materiales” pues “el discurso contribuye a la creación y constante recreación de las relaciones, sujetos y objetos que pueblan el mundo social” (Fairclough, 1995: 73). De manera similar, Skinner afirma que la relación entre el mundo social y lingüístico no es una relación externa, en que el segundo es un reflejo del primero. Si bien “es cierto que nuestras prácticas sociales ayudan a investir con significados nuestro vocabulario social (...) es igualmente cierto que nuestro vocabulario social ayuda a constituir el carácter de estas prácticas” (Skinner, 2007: 293). Así, como señalan los autores revisados, la dimensión práctica de las relaciones sociales requiere de un cierto marco que las haga coherentes e inteligibles y permita, de ese modo, actuar políticamente. Como se ha insistido en las dos secciones previas, parte importante de la comprensión política del mundo social se efectúa por medio del lenguaje, el que se considerará, para efecto del análisis, como ideológicamente investido y que permite, por lo tanto, estructurar, proyectar e indicar cursos particulares de acción.

En suma, el proceso de despolemización y disputa por el lenguaje por un lado, y la acción política, por el otro, proporcionan los marcos de análisis más amplios para examinar el caso bajo estudio. Sin embargo, estos aspectos del análisis ideológico son considerablemente generales y amplios, y en la práctica se despliegan, manifiestan y desarrollan en una multiplicidad de formas, funciones, procesos e instituciones. Con el propósito de delimitar la diversidad de expresiones y funciones de las ideologías, y así clarificar en qué sentido pueden considerarse como un factor relevante en los procesos de conflicto social y estructuración partidaria, en las secciones restantes de este capítulo se proponen tres dimensiones particulares que

serán analizadas a lo largo de la investigación: la dimensión estratégica, la dimensión organizacional, y su dimensión de adaptabilidad.

1.3 Tres dimensiones de análisis de las ideologías: estrategia, organización y adaptabilidad

Una de las características centrales de las ideologías es su estrecha relación con la realidad social. Las ideologías operan en contextos concretos y son utilizadas por actores políticos para tratar con situaciones y problemas contingentes. Las disputas ideológicas sobre el significado y el llamado a la acción de las ideologías funcionan precisamente dentro del campo de conflictos sociales y políticos. Para delinear en un sentido más específico las características de las ideologías expuestas en la sección anterior, y de ese modo examinar cómo estas se despliegan en la práctica política, en este apartado se proponen tres dimensiones de análisis relativas al funcionamiento de las ideologías. En primer lugar, la dimensión estratégica de las ideologías, referida a su capacidad para estructurar políticamente los conflictos sociales. Este ámbito refiere a cómo las ideologías permiten definir a los grupos definir aliados y adversarios, diagnosticar los conflictos sociales a partir de sus causas y soluciones, y a partir de ello, a establecer objetivos, demandas, medios y pautas de acción. En segundo lugar, se aborda la dimensión organizacional de las ideologías, referida a su capacidad para generar una identidad colectiva entre los miembros del grupo, así como a las estructuras y prácticas específicas que adoptan sus organizaciones. Por último, se examinará la adaptabilidad de las ideologías. Esto es, cómo éstas sirven a sus miembros para responder e influir en los eventos políticos en los que se ven involucrados, pero también como las ideologías pueden ser adaptadas para contingencias no previstas en sus configuraciones conceptuales originales.

Con el propósito de analizar con mayor detalle las tres dimensiones señaladas, en esta sección se complementan las aproximaciones conceptuales y discursivas de las ideologías con algunas de las categorías de análisis utilizadas desde el campo de estudio de los movimientos sociales. Más específicamente, se recurre los enfoques de la acción colectiva y principalmente el *frame analysis*, categoría utilizada para examinar cómo los sujetos significan y organizan su experiencia. En una de sus formulaciones más influyentes, Goffman define los marcos (*frames*) de referencia como “esquemas interpretativos” que convierten “en algo que tiene sentido lo que de otra manera sería un aspecto sin sentido de la escena”, es decir, un marco “permite a un usuario situar, percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de sucesos concretos definidos en sus términos” (Goffman, 2006: 23). Aplicado al estudio de los movimientos sociales, Snow y sus colaboradores (1986: 464) destacan cómo estos marcos, al dar significado a los eventos sociales, “funcionan para organizar la experiencia y guiar la acción, ya sea individual o colectiva”.

Como proceso activo y dinámico, Benford y Snow (1988: 198) se refieren a los procesos de *framing* –o de enmarcamiento–, definidos como el “trabajo de significación” mediante el cual los movimientos “enmarcan, o asignan significado e interpretan, eventos y condiciones relevantes en formas que están dirigidas a movilizar potenciales adherentes y participantes, obtener el apoyo de espectadores, y desmovilizar antagonistas”. En esta dimensión colectiva, los marcos pueden definirse, siguiendo a Klandermans (2000: 28), “como el conjunto de creencias colectivas que sirven para crear un estado mental en el cual la participación en la acción colectiva aparece como significativa”. Así, en un sentido general, las categorías de *frame* y *framing* permiten examinar concretamente cómo los actores dan sentido a las situaciones conflictivas en las que se encuentran y, a partir de eso, cómo guían y estructuran su acción política utilizando sus creencias ideológicas.

No obstante la utilidad que revisten estas categorías resulta necesario clarificar que con ideología y *framing* no se hace referencia a los mismos procesos cognitivos o conceptuales. En efecto, como señalan Oliver y Johnston (2000: 41-45), el concepto de *frame* (marcos) exhibe ciertas características propias en su uso que lo distinguen del concepto de ideologías. Mientras los marcos funcionan como estructuras cognitivas individuales y sirven para identificar patrones de comportamiento, las ideologías proporcionan una teoría acerca de la sociedad, “un sistema o conjunto de creencias que explican cómo se formaron los arreglos sociales y cómo estos pueden ser cambiados o reforzados”. Para los efectos de esta investigación, los aportes del *frame analysis* serán utilizados para enfatizar algunas de las funciones y características particulares de las ideologías. En primer lugar, sostienen Snow y Benford (2000: 57), mediante el *frame analysis* es posible superar el examen de las ideologías como un conjunto estático de creencias y conceptos y subrayar, en cambio, su carácter dinámico. En segundo lugar, las ideologías sirven como un recurso cultural para la organización, de significación y construcción de la acción colectiva (Snow y Benford, 2000: 58-59). A un nivel empírico, observar el proceso de *framing* permite comprender cómo los actores utilizan sus creencias ideológicas en situaciones concretas para dar sentido y resolver problemas específicos. Por último, los procesos de *framing* pueden operar un “trabajo ideológico correctivo” al proveer un medio para analizar el frecuente “trabajo reconstitutivo que se requiere cuando los miembros de cualquier comunidad ideológica o de pensamiento encuentran evidentes divergencias entre sus creencias y las experiencias y eventos en el mundo” (Snow y Benford, 2000: 59). Este último aspecto resulta especialmente relevante al momento de examinar las trayectorias de las ideologías, y sobre todo en su dimensión de adaptabilidad.

Puesto que las dimensiones presentadas a continuación remiten a los niveles más concretos en que observa el funcionamiento de las ideologías, la exposición recurre a ejemplos de partidos, movimientos y organizaciones socialistas chilenas analizadas en esta investigación. Los ejemplos utilizados tienen el propósito de ilustrar los procesos y dimensiones descritas, las que pueden ser efectivamente observadas en la gran variedad de documentos históricos utilizados para el análisis:

periódicos, folletos, programas, manifiestos, panfletos, etc. Por último, cabe señalar que, si bien esta investigación no trata exclusivamente con movimientos sociales, las herramientas metodológicas del *frame analysis* son relevantes en tanto tratan con procesos de acción colectiva más generales. Tal como reconocen algunos autores, las herramientas analíticas empleadas en este campo de estudio son ampliamente compatibles con otros enfoques disciplinarios (Diani, 2000). A su vez, en lo que respecta a la ideología, los procesos de *framing* no se limitan a los movimientos sociales, sino que operan también en otros espacios políticos institucionalizados que usualmente aparecen claramente diferenciados de aquellos (Klandermans, 2000: 29). En este sentido, aunque las aproximaciones citadas en las secciones siguientes se han elaborado principalmente desde el estudio de los movimientos sociales, el análisis de marcos y acción colectiva bien puede aplicarse a los procesos de institucionalización y estructuración partidaria involucrados en la formación de clivajes.

1.3.1 La dimensión estratégica

Como ya se señaló, una de las funciones centrales de las ideologías consiste en proveer una visión particular de mundo, de modo tal que los sujetos puedan delimitar e interpretar la realidad social desde un punto de vista específico. Así, en la medida en que los sujetos se encuentran insertos en procesos de conflicto y lucha social, se esforzarán por delinear los diversos sucesos y problemas presentes en su entorno desde la perspectiva de sus creencias ideológicas. Como sostiene Van Dijk (1999: 177), las prácticas ideológicas están condicionadas principalmente por la forma en que los actores representan subjetivamente las estructuras sociales. Así, tanto la disputa por el lenguaje y sus significados, como también el llamado a la acción que realizan las ideologías, se expresan en la disputa por definir un conjunto de hechos y sucesos como problemáticos y políticamente relevantes, y que hasta ese momento no habían sido considerados como tales por la o las ideologías predominantes.

Para efectos del análisis, el proceso arriba descrito es lo que se denominará dimensión estratégica de las ideologías, la cual involucra dos facetas que, aunque son analíticamente diferenciables, resultan complementarias. En primer lugar, y dado que las ideologías pertenecen siempre a grupos, éstas operan a partir de la distinción entre un *ellos* y un *nosotros*, delimitando así tanto la identidad del propio grupo, como la de sus rivales, enemigos, adversarios, pero también a potenciales grupos aliados. En segundo lugar, y sirviéndose de la distinción base entre ellos/nosotros, las ideologías permiten a los grupos identificar situaciones consideradas problemáticas y atribuirles a sus adversarios. A partir de ello, los grupos son capaces de elaborar un diagnóstico de sus causas y consecuencias, soluciones, objetivos, metas y, eventualmente, elaborar estrategias para movilizar adherentes y establecer los medios de acción considerados como los más adecuados para el logro de sus objetivos. Es en este sentido que las ideologías despliegan su

función estratégica, “pues es a través de la articulación de los significados simbólicos de la acción que el actor puede incrementar su ventaja sobre otros”, y así ganar “consenso sobre los componentes de otras organizaciones, y el apoyo de grupos no involucrados directamente en el conflicto contra las iniciativas de sus adversarios” (Melucci, 1996: 353).

Respecto al primer punto señalado, y siguiendo a Van Dijk (1999: 93-95), una de las principales dimensiones sobre la cual se levantan las ideologías es el esquema de polarización “ellos/nosotros”. En tanto los grupos ideológicos se encuentran involucrados en conflictos sociales, necesariamente deben construir una imagen de sí mismos y de los grupos rivales, estando general representados *nosotros* en términos positivos, y *ellos* en términos negativos. Estas representaciones positivas y negativas constituyen, de acuerdo con el autor, una “propiedad fundamental” de las ideologías, de la cual se elaboran una serie de representaciones “polarizadas” sobre los acuerdos sociales existentes, es decir, sobre “el tipo de cosas que encontramos mejor”, o bien aquellas cosas “que creemos que los otros representan”. Estas representaciones suelen ser expresiones más específicas de los valores del grupo, que son aplicadas a las situaciones o arreglos sociales en cuestión. De este modo, “las ideologías son representaciones de lo que somos, de lo que sostenemos, de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras relaciones con otros grupos”, especialmente contra los grupos adversarios (Van Dijk, 1999: 95). La construcción de este esquema de oposición no sigue un formato único, sino que se elabora a partir varias categorías que delinear la estructura de las ideologías. Siguiendo a Van Dijk (1999: 96), estas categorías pueden ser de *pertenencia* (quiénes somos y quiénes pueden ser miembros del grupo), *actividades* (qué hacemos), *objetivos* (qué queremos realizar y por qué), *valores/normas* (cuáles son nuestros valores y cómo evaluamos a otros), *relaciones de grupo* (definición de posición social, enemigos, y grupos afines) y *recursos* (cuáles son los recursos esenciales para el grupo).

Desde la perspectiva de la acción colectiva, enfocada en la movilización de actores y la disputa por recursos sociales, Melucci enfatiza, la importancia de la definición de adversarios y, a partir de ello, los objetivos por los cuales luchar en un contexto de conflicto. Como observa en el caso de los movimientos sociales, en las ideologías siempre es posible identificar al menos tres elementos, a saber, la definición de los actores movilizados, los adversarios contra los que se lucha y los objetivos colectivos de la lucha. En su interrelación, Melucci indica que estos elementos permiten definir en términos más específicos la posición del grupo respecto a sus oponentes en las siguientes formas: a) la definición del grupo social en cuyo nombre se realizan acciones determina los límites de la identidad colectiva y su legitimidad; b) la situación indeseable que ha dado origen a la acción colectiva se atribuye a un adversario ilegítimo; c) los objetivos o metas deseables por los cuales es necesario luchar existen también para toda la sociedad en su conjunto; d) hay una relación positiva entre el actor y las metas generales de la sociedad, y por lo tanto las acciones del movimiento van más allá de los intereses particulares del actor; e) el adversario es visto como un obstáculo para las metas de la sociedad; y f)

se produce, en consecuencia, una oposición irreconciliable entre el actor en cuestión y sus adversarios (Melucci, 1996: 350). De esta manera, toda ideología “tenderá a asignar la responsabilidad por la situación negativa a las iniciativas del adversario, en un intento por negarle cualquier legitimidad al oponente”, al tiempo que intenta “mejorar la posición del actor *vis-à-vis* al antagonista a la vista de un público, del cual se busca su apoyo o favor” (354).

No obstante, el contenido que adquiere la oposición varía contextualmente, y su especificidad depende en gran medida de cómo los grupos relacionan sus principios ideológicos con las situaciones concretas en las que se desenvuelven. Es en esta relación entre ideología y realidad social donde se desarrollan sus aspectos propiamente estratégicos, relativos a cómo los grupos problematizan y definen los hechos de su entorno social, a partir de lo cual formulan sus objetivos, propuestas, medios de acción, etc. En este ámbito, el *frame analysis* da luces sobre algunos de los procesos implicados en la construcción de los marcos estratégicos de las ideologías. Siguiendo a Benford y Snow (1988, 2000), se pueden identificar tres momentos en el proceso de *framing*. En primer lugar, puede identificarse un proceso de diagnóstico, que “involucra la identificación de un problema y la atribución de responsabilidad o causalidad” (Benford y Snow, 1988: 200). Por lo general, esta dimensión se desprende de la identificación de los adversarios y se elabora a partir de situaciones consideradas como injustas, dentro de las cuales se identifican a los actores considerados como sus responsables o culpables. En segundo lugar, le sigue una tarea de pronóstico (*prognostic*), referida a la “articulación de una solución propuesta al problema, o al menos un plan de ataque, y las estrategias para llevar a cabo ese plan”. Es decir, aborda la pregunta sobre “qué hacer, así como los problemas de consenso y la acción de movilizar” (Benford y Snow, 2000: 616). Finalmente, es posible identificar un *framing* motivacional. Este consistente en el “llamado a las armas” a los miembros del grupo, el momento en que se elaboran las razones para involucrarse en acciones destinadas a mejorar la situación presente a través de un lenguaje y motivos apropiados para dicha tarea (Benford y Snow, 2000: 671).

Estos procesos particulares involucrados en la construcción de marcos interpretativos permiten comprender cómo los grupos e individuos utilizan los marcos ideológicos para transformar un conjunto de situaciones en una cuestión políticamente relevante. Sin embargo, en el nivel de análisis más específico y concreto en que se utilizan y manifiestas las ideologías, resulta necesario tener en cuenta que estas siempre retienen un nivel de abstracción que cruza sus expresiones particulares. Las ideologías no son, en este sentido, construcciones totalmente contingentes. Por el contrario, siguiendo a Zald (2000), si se considera la acción colectiva como una acción ideológicamente estructurada, lo que hacen más bien los actores al momento de organizar y dar sentido a su experiencia política es recurrir a sus principios ideológicos más abstractos, los que proporcionan límites y posibilidades a su interpretación de los hechos. Por lo general, en los casos analizados en esta investigación, este proceso puede ser observado y analizado a

través de las formulaciones políticas y programáticas presentes en periódicos, folletos, programas partidarios, manifiestos, libros y panfletos del periodo.

Este despliegue estratégico de las ideologías es un proceso bidireccional. Por un lado, las formas en que se aplican de los principios ideológicos de un grupo es siempre un proceso dependiente en gran medida de las sus condiciones contextuales. Por otro, lo que se puede o no hacer en determinados contextos está guiado por el contenido abstracto de las ideologías, que definen qué elementos son más relevantes o urgentes. En este sentido, como observa Gillan (2008: 248) sobre los movimientos sociales, estos son “animados por las creencias críticas de sus participantes”, pero en su puesta en práctica los actores planean sus acciones estratégicamente, “tomando en cuenta su comprensión de los factores contextuales así como qué objetivos pueden ser alcanzables y que recursos y oportunidades políticas están disponibles”.

Adicionalmente, parte importante del análisis se centrará en cómo dicha elaboración estratégica se sirve del contenido de las ideológicas, es decir, cómo se expresa conceptualmente. Desde su expresión como *clusters* conceptuales, y siguiendo a Freedman (2003:61-65), esta función de las ideologías será analizada concretamente por medio de dos características particulares. Por un lado, en su estructura conceptual las ideologías asignan *prioridad* a ciertos conceptos dependiendo de su ubicación entre el núcleo ideológico y la periferia. Lógicamente, aquellos conceptos más cercanos al núcleo, así como los conceptos adyacentes que lo sustentan y delimitan, poseen un mayor peso al momento de problematizar determinadas situaciones en contraste con aquellos conceptualmente más débiles o relegados a los márgenes del conjunto de creencias. Por otro lado, las configuraciones conceptuales de las ideologías operan asignando un grado de *proporcionalidad* a sus contenidos. Con ello se hace referencia “al espacio relativo asignado dentro de cada ideología a un tema particular, o un clúster de conceptos”, y se asocia al modo en que se presentan los argumentos específicos. Incluso cuando ideologías afines compartan prioridad en ciertos conceptos, estos pueden variar dependiendo de la importancia o posición que se tengan sobre temáticas particulares.

Si bien este conjunto de categorías de análisis puede resultar especialmente relevante para el estudio de ideologías o grupos políticos marcadamente opuestos, su uso para esta investigación no es menos significativa aun cuando se trate con variantes de una misma familia ideológica, como es el caso del socialismo. Aunque el socialismo proporciona una matriz conceptual y de creencias común a sus diversas corrientes y tradiciones específicas, uno de los propósitos centrales de esta tesis es identificar las particularidades de cada una de ellas, a modo de comprender cómo y en qué sentido sus propuestas políticas fueron más o menos exitosas en canalizar el conflicto de clase. En este sentido, el énfasis dado a la dimensión estratégica de las ideologías resulta crucial para distinguir y analizar las diferencias entre las distintas corrientes socialistas, así como los cambios y transformaciones en sus proyectos políticos.

En lo que respecta al clivaje de clase examinado en esta investigación, la dimensión estratégica del socialismo se desarrolló en un amplio espectro que variaba entre las vías puramente extrainstitucionales y aquellas exclusivamente institucionales. Como se constata en los capítulos 2 y 3, en un principio la generalidad del campo socialista compartía un conjunto conceptual común, con diferencias estratégicas distinguibles, pero no enteramente excluyentes. Esto fue sobre todo el caso de las dos principales corrientes iniciales del socialismo chileno, la anarquista y la demócrata-socialista, que compartían una interpretación clasista de la sociedad, dividida entre proletarios y capitalistas. No obstante, a lo largo de su práctica política, sus divergencias estratégicas se acentuaron lo suficiente como para deslindar claramente ambas corrientes. Los anarquistas profundizaron una posición extrainstitucional de tipo revolucionaria dirigida a la abolición total del régimen, mientras los demócrata-socialistas abanaron paulatinamente las alternativas extralegales para privilegiar, en cambio, una participación institucional táctica e instrumental. Una tercera corriente, de orígenes ideológicos propios, el socialismo del Estado gestado al interior del Partido Radical chileno, constituyó una alternativa netamente institucional. A diferencia de las otras vertientes, el socialismo de Estado aspiraba a una conciliación de clases, perfilando una estrategia de tipo reformista y legal a través de las instituciones representativas. Resulta interesante notar que esta diferenciación se produjo a partir de la puesta en práctica de los principios ideológicos generales del socialismo, que obligaron a cada grupo a definir sus dimensiones estratégicas con mayor especificidad. A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XX, estas concepciones estratégicas inicialmente sutiles, se transformaron en alternativas excluyentes entre sí y pasaron a ser elementos distintivos de las respectivas corrientes socialistas.

Durante la coyuntura crítica en la década de 1920, tema del capítulo 4, el eje institucional-extraintitucional llegó a su punto máximo de oposición entre la vertiente anarquista y la del nuevo Partido Comunista, continuador de la corriente demócrata-socialista. Para ese periodo, ambas corrientes constituían dos tradiciones estratégicas plenamente diferenciadas y conceptualmente definidas. En este sentido, el periodo que se abre en 1920 fue el punto de llegada de ambas concepciones estratégicas y constituyó un momento de prueba para su puesta en práctica. El resultado de dicha prueba tuvo consecuencias a largo plazo para ambas vías. Mientras la vía extraintitucional representada en el anarquismo fue definitivamente desplazada por su inviabilidad práctica, durante la coyuntura crítica el Partido Comunista reforzó los elementos estratégicos institucionales heredados de los demócrata-socialistas. Hacia la década de 1930, periodo examinado en el capítulo 5, las opciones extraintitucionales al interior del campo socialista resultaban minoritarias. Salvo el periodo insurreccional del Partido Comunista, cuyos resultados fueron mayormente negativos, y el origen golpista del Partido Socialista de 1933, las estrategias extralegales tuvieron una presencia marginal. En el caso del Partido Comunista, el modelo revolucionario soviético carecía de todo sustento conceptual y práctico en su trayectoria estratégica local. En

cambio, la vía institucional presente en su tradición estratégica encontró una viabilidad mayor con el giro comunista internacional hacia los frentes populares, alternativa que finalmente predominó en el Partido Comunista chileno. Desde un pragmatismo ideológico mayor, el Partido Socialista rápidamente abandonó las vías extralegales, para adoptar una vía institucional que resultaba más acorde con sus propios medios y con la estabilización del régimen político del periodo.

Lo que estos casos brevemente esbozados permiten observar es la importancia que tiene la dimensión estratégica para explicar la trayectoria política de las ideologías, así como los motivos que determinan su éxito o fracaso. En primer lugar, y siguiendo a Melucci (1996: 353), la dimensión estratégica tiene un rol crucial en los periodos consolidación de las organizaciones. Es en esos momentos en que las agrupaciones políticas definen con mayor claridad su posición ideológica frente a otros grupos, y asientan un conjunto de concepciones y prácticas que se tornan distintivas de su propia corriente ideológica. En segundo lugar, las configuraciones estratégicas que cristalizan durante los periodos iniciales de un grupo ideológico resultan cruciales para examinar su desenvolvimiento en periodo de rápido cambio político y social, como son las coyunturas críticas. Trayectorias estratégicas más elaboradas y sólidas pueden ser capaces de resistir a la contingencia política, o bien resultar demasiado rígidas para responder a cambios imprevistos en sus concepciones originales. A la inversa, trayectorias estratégicas menos desarrolladas en sus niveles conceptuales y prácticos pueden resultar inviables en los periodos de cambio, o bien mostrar grados suficientes de pragmatismo como para abordar dichas coyunturas. En ambos momentos, la dimensión estratégica depende de la constante interacción entre los principios ideológicos del grupo y la forma en que aquellos se relacionan con la realidad social. Es solo a través de esta interacción que las ideologías pueden desarrollar los “marcos de toma de decisiones sin los cuales la acción política no podría ocurrir” (Freeden, 2003: 127) y que constituyen la función central de la dimensión estratégica.

1.3.2 Dimensión organizacional: identidad y formas de organización

Aunque dimensión estratégica cumple un papel central en el despliegue político de las ideologías, por sí sola no es suficiente para asegurar el éxito de una agrupación. Como señala Melucci (1996: 313), la sobrevivencia de un movimiento “solo es posible si puede desarrollar una organización y liderazgo relativamente estable”, dándose una “estructura organizacional” reconocida por sus miembros y llamada a “institucionalizar los procesos de toma de decisiones a un grado necesario para dedicar los recursos del movimiento para el logro de sus metas”. Por ello, una segunda dimensión bajo análisis corresponde a la función organizacional que desempeñan las ideologías en los procesos de institucionalización de los grupos políticos, ya sea en partidos, movimientos u otras formas de agrupamiento. Esta dimensión ha sido un importante objeto de investigación desde la publicación de *Los partidos políticos* de Robert Michels en 1911, influyendo tanto en la ciencia política

para el análisis de modelos de partido (Duverger, 1957; Panebianco, 1990; Katz y Mair, 1994), como en la sociología de la acción colectiva para el estudio de las estrategias de organización en la gran diversidad de movimientos sociales (Clemens y Minkoff, 2004; Davis *et al.*, 2005). Asimismo, para el caso de la izquierda en Chile, la dimensión organizacional ha sido considerada en trabajos como el de Angell (1972) en su estudio sobre el movimiento obrero, DeShazo (2007) para el anarquismo, Furci (2008) para el caso del Partido Comunista y en Pollack y Rosenkranz (1986) en su estudio organizacional sobre el Partido Socialista.

Pese a las contribuciones que estos estudios han realizado a la comprensión de la organización y estructuras partidarias, el enfoque aquí adoptado difiere significativamente. Mientras la mayoría de dichos trabajos se centran en las dimensiones institucionales, las estructuras internas de organización, en la movilización de recursos, o las tipologías de partidos, el foco de esta investigación está puesto en cómo los miembros de un grupo piensan y estructuran su organización de acuerdo con sus principios ideológicos y sus lineamientos estratégicos. En este sentido, el análisis se concentra en cómo las ideologías sirven para definir la pertenencia del grupo, asegurar su cohesión, justificar la distribución de poder en su interior y establecer las estructuras necesarias para ejecutar sus estrategias.

En esta dimensión se distinguen dos facetas implicadas en la formación de una organización política. En primer lugar, las ideologías contribuyen a definir y consolidar la identidad interna del grupo. A partir de la oposición ellos/nosotros, todo grupo establece una identidad propia que se traduce en el establecimiento de criterios de pertenencia del grupo –normas y ritos que delimitan quiénes son o no miembros– así como en medios de cohesión ideológica que aseguren un nivel suficiente de integración interna. En segundo lugar, los principios ideológicos contribuyen a delimitar y justificar el ordenamiento y estructura interna de la organización, de modo tal que hagan viable su dimensión estratégica. En estos procesos, la ideología tiene una incidencia directa, en la medida que la organización debe responder de forma coherente a sus principios y conceptos. Esta dimensión es especialmente relevante para los movimientos socialistas, en los cuales la importancia conceptual dada a la clase social, la igualdad, el trabajo, la cooperación y solidaridad, requieren de organizaciones de masas capaces de plasmar dichos principios. En general, en los casos examinados la formulación de estos dos aspectos suele ser bastante explícita y se expresan comúnmente en los diagnósticos que los miembros de un grupo realizan sobre las debilidades, fortalezas y necesidades de su organización. Así, el análisis de dimensión está puesto sobre todo en los lineamientos discursivos y conceptuales de la organización.

Identidad ideológica

Respecto a la identidad del grupo, esta es una de las principales áreas de influencia de las ideologías, puesto que, al definir un esquema de oposiciones entre ellos y

nosotros, se definen al mismo tiempo “los criterios de pertenencia a un grupo” (Van Dijk, 1999: 152). En este sentido, dado que las ideologías se estructuran principalmente como un “esquema de sí mismo de grupo”, “la identidad del grupo se funde con la *ideología* de grupo”. Esto supone que las ideologías deben representar “las creencias fundamentales que son por lo general compartidas (...) a nivel de grupo, y contestar preguntas fundamentales como ‘¿Quiénes somos?’, ‘¿De dónde venimos?’, ‘¿Quién pertenece a nuestro grupo?’, ‘¿Qué hacemos (...) y por qué?’, ‘¿Cuáles son nuestros objetivos y valores?’, etc.” (Van Dijk, 1999: 155). Esta relación entre ideología e identidad opera, no obstante, a un nivel bastante general, y solo constituye una condición básica para la existencia de grupos ideológicos, más no siempre se traduce en una estructura institucionalizada. Es posible que los grupos ideológicos no siempre se agrupen en una organización, o bien pueden existir adherentes que se identifican con algún grupo ideológico sin ser miembros de la organización que representa esa ideología. Para examinar con más detalle el rol particular que desempeñan las ideologías en una organización es necesario referirse brevemente al proceso mismo de estructuración organizativa.

Siguiendo nuevamente a Melucci (1996: 317-318), una etapa crucial en el proceso de organización de cualquier movimiento corresponde a la formación de normas. Como señala el autor, todo grupo que busca organizarse produce necesariamente “un sistema constitucional de normas, que son legitimadas e institucionalizadas, y que determinan los límites de discreción dentro de los cuales la acción colectiva puede desarrollarse”. Este sistema de normas es, por tanto, parte esencial del momento de fundación de un movimiento u otro tipo de organización. Más específicamente, el establecimiento de normas regula el comportamiento de los miembros en al menos cuatro ámbitos. En primer lugar, el intercambio entre los miembros y la organización misma, definiendo el grado de involucramiento de los miembros, una estructura de sanciones y recompensas, e incentivos para su lealtad y participación. En segundo lugar, las normas regulan la relación entre los diversos componentes de una organización, al definir las tareas y responsabilidades de cada función, unidad geográfica o nivel jerárquico. Tercero, las normas deben regular la relación entre la organización y la sociedad, particularmente con aquellos grupos sociales relevantes para sus objetivos. Finalmente, especifican los objetivos y los medios para la acción colectiva.

En vista de lo anterior, es posible delimitar más precisamente el rol que cumple la ideología y la identidad ideológica de un grupo. Para que el sistema de normas sea efectivo en los diversos ámbitos señalados, la organización necesita mantener un mínimo de legitimidad y unidad interna, cuestión que es alcanzada principalmente mediante una “función de integración” de las ideologías. Como señala Melucci, debido a que toda organización se encuentra sujeta a presiones internas –la fragmentación del grupo– y externas –derivadas de la acción de los adversarios– resulta crucial para todo grupo “mantener la unidad organizacional”. En esto “la ideología emerge como una de las principales herramientas que puede usarse para asegurar la integración” al organizar y unificar las demandas del grupo. En su

función de integración, las ideologías “coordinan, articulan y hacen coherentes estas demandas, asociándolas con principios generales”, “solidifican la identidad colectiva y previenen conflictos internos que dañen la unidad”, al tiempo que “fijan los límites de pertenencia y los criterios de identificación y castigo para aquellos que se desvían de estas normas” (Melucci, 1996: 352-353). A estas funciones habría que agregar el efecto de cohesión que permiten las ideologías en tanto conjunto de creencias colectivas. Mediante la invocación de sus principios ideológicos nucleares, las organizaciones pueden reforzar, aunque sea solo a un nivel discursivo, la imagen de unidad y coherencia entre sus miembros, aun cuando en la práctica esta sea débil o fragmentada. No se trata, en este sentido, de una distorsión ideológica (aunque puede operar de esa forma), sino más bien de un recurso necesario para que los grupos puedan coordinarse exitosamente al momento de la acción política.

Formas organizativas

Sin embargo, la influencia de la ideología en la organización de un grupo no se reduce solo a la formación de la identidad. Adicionalmente, el segundo aspecto implicado en la función organizacional de las ideologías es la forma que adoptan las organizaciones. Esta área, sin embargo, ha sido escasamente tratada, aunque algunos trabajos suelen reconocer cierta relación entre la ideología y la estructura de una organización. Por ejemplo, en relación con la formación de una identidad de grupo, tanto Van Dijk (1999: 158-159) como Melucci (1996: 353) reconocen que suele manifestarse con el conjunto de prácticas, rituales y actividades rutinarias de la agrupación, estando implicadas en las formas mismas de su organización. Más relevante resultan las observaciones realizadas desde la ciencia política, particularmente en lo referido al modelo de partido de masas, estrechamente asociado al socialismo. Katz y Mair (1993: 603), por ejemplo, afirma que subyacente a los partidos de masas se encuentra no solo una estrategia organizacional, sino también “una concepción característica sobre la democracia y el rol de un partido político en ella”. Panebianco (1990: 304), por su parte, reconoce que “los objetivos ideológicos originarios contribuyen a forjar la organización en su fase inicial”, y que estos objetivos influyen “sobre muchas de las decisiones iniciales en materia de organización (por ejemplo, si se optará por una organización a base de células o por secciones, etc.)”. En esta línea, en los casos de los partidos de masas Duverger (1957: 93-97), identifica cómo algunos aspectos de la organización que responden a criterios ideológicos. Respecto a los partidos socialistas, destaca la importancia del proceso de reclutamiento de miembros en lo político y financiero. En lo político, estos partidos buscarían “la educación de la clase obrera” para formar una “*élite* capaz de tomar en sus manos el gobierno y la administración del país”. Respecto a lo financiero, sus mecanismos de cuotas tendrían “como efecto sustituir al financiamiento capitalista de las elecciones, con un financiamiento democrático”. Así, concluye que es posible explicar que la distinción entre partidos de cuadro y de

masas “corresponda igualmente, más o menos, a las derechas e izquierdas, partidos ‘burgueses’ y partidos ‘proletarios’”.

Estas observaciones permiten identificar la presencia de una guía ideológica en el modo en que los grupos se estructuran organizacionalmente. Más específicamente, aquí se sostiene que esta guía ideológica está imbricada en la forma de organización en tanto establece una estructura y sistema de poder en las siguientes dimensiones: la “distribución de poder” interna que establece dicha estructura; “los procesos de agregación de demandas y formación de decisiones”; y los “mecanismos que garantizan la sucesión de las funciones de liderazgo” (Melucci, 1996: 316). Es en este espacio de la organización que las ideologías plasman parte de sus contenidos conceptuales y creencias fundamentales, delimitando las formas que pueden adoptar a través de ciertos principios generales. Así, por ejemplo, las características que los autores mencionados identifican en los partidos de masas, como su carácter democrático, la inclusión de la clase obrera, o su financiamiento colectivo, se fundamentan en gran medida en el contenido ideológico del grupo.

En el caso de los partidos socialistas, la importancia dada en esta ideología a conceptos como igualdad, democracia, comunidad, o clase, y el modo e intensidad con que estos se expresan, influyen decisivamente en las estructuras y las relaciones de poder que estos definen. Corrientes socialistas que promuevan formas de democracia directa pueden preferir formas asociativas de base por sobre organizaciones jerárquicas, o bien netamente partidarias en el caso de aquellas corrientes que promuevan reformas parciales, o con una fuerte dirección unificada sobre sus componentes de base en el caso de partidos abocados a la transformación radical del poder estatal. Así, formas y espacios de organización en distintos niveles como federaciones, sindicatos, comités, células, cooperativas, etc., expresan también, y de modo concreto, los principios ideológicos del grupo. Por último, cabe agregar que esta fundamentación ideológica de la organización también es relevante en tanto legitima las políticas y decisiones adoptadas por los grupos internos abocados a la toma de decisiones. La percepción por parte de los miembros de que las relaciones internas de la organización no se corresponden con sus principios ideológicos puede generar inconformidad y, en consecuencia, fisuras internas en el grupo que lo debilitan o fraccionan.

Por último, esta faceta de la función organizacional de las ideologías permite analizar a su vez la formación o ausencia de partidos políticos entre las diversas corrientes socialistas. En esta investigación se evitará la equiparación exclusiva entre organización y partidos políticos, pues se considera que la decisión de un grupo de formar un partido es también una decisión ideológica. Entre los escasos estudios que abordan la formación partidaria desde esta perspectiva, Aminzade (2005) muestra, para el caso del Partido Republicano francés de mediados del siglo XIX, cómo la decisión de los republicanos de organizarse como movimiento o como partido respondió significativamente a una disputa interna del republicanismo entre concepciones de democracia participativa y representativa. El autor argumenta que tanto las tendencias ideológicas más cercanas a formas de

democracia directa, como las restricciones institucionales a la participación política, habrían moldeado la adopción de formas de organización y acción de carácter disruptivas, no-electorales y contrarias a la institucionalidad representativa. Esta disyuntiva organizacional entre formas partidarias/parlamentarias de organización y agrupaciones de base no partidistas fue también una disputa ideológica significativa durante el periodo acá analizado. Como señalan Katz y Mair (1993, 1995), el auge de los partidos de masas a principios del siglo XX respondió en gran medida a la activación y participación política de grandes sectores sociales antes excluidos, con escaso compromiso con la institucionalidad existente. Igualmente, Tarrow (2011: capítulo 6), identifica las diversas alternativas organizacionales que se desarrollaron desde fines del siglo XIX, siendo el modelo de partido socialdemócrata y el contramodelo anarquista las dos formas de organización en competencia durante dicho periodo histórico.

En el caso particular del socialismo chileno, el rango de alternativas organizacionales siguió de cerca las vías estratégicas extrainstitucionales e institucionales. El punto nodal de los debates organizacionales al interior del campo socialista fue la formación de partidos políticos. Durante los periodos de origen y desarrollo del socialismo tratados en los capítulos 2 y 3, la decisión de formar partidos políticos convivió con un conjunto de alternativas no partidarias de tipo sindical y gremial. En este aspecto, el deslinde ideológico inicial en la dimensión organizacional del socialismo se produjo en torno a la consolidación identitaria del anarquismo, caracterizado por su total rechazo al modelo de partido político. En su lugar, el socialismo anarquista privilegió la organización de sociedades obreras, así como la formación de núcleos intelectuales o de propaganda. En contraste, para la corriente demócrata-socialista, proveniente del Partido Democrático chileno, el modelo de partido fue parte integral de su configuración ideológica. Antes que descartar la estructura partidaria, los demócrata-socialistas, a ejemplo de la socialdemocracia europea, buscaron ampliar su estructura para integrar a las sociedades obreras. En menor medida, este fue también el caso de la corriente socialista en el Partido Radical chileno, que pretendió una democratización de las estructuras partidarias. En ambos casos, la transformación de sus estructuras estaba estrechamente ligada a la esperada reconversión ideológica de sus respectivos partidos, que, al incorporar a las sociedades obreras, debían convertirse efectivamente en organizaciones de tipo socialista.

El análisis muestra que durante el periodo de desarrollo la alternativa partidaria fue vista como un complemento necesario para apoyar la acción política de las organizaciones obreras no políticas. Sin embargo, el partido político estuvo lejos de predominar en el campo socialista. Durante el auge del sindicalismo a finales de la década de 1910, el modelo federativo sindical resultó ampliamente aceptado por el campo socialista, mientras que el modelo de partido político se circunscribió casi exclusivamente a la corriente demócrata-socialista organizada en torno al Partido Obrero Socialista. No obstante, a partir de la coyuntura crítica examinada en el capítulo 4, la convivencia entre los modelos partidarios y los no partidarios

experimentó una creciente tensión que siguió de cerca las divergencias estratégicas entre las vías institucionales y las extrainstitucionales. El hito clave en este proceso fue la formación del Partido Comunista chileno en 1922, cuyo modelo de partido bolchevique introdujo una fisura en las concepciones organizacionales del socialismo local. Bajo este nuevo modelo, los comunistas privilegiaron progresivamente las estructuras partidarias por sobre las sindicales, las que fueron posteriormente subordinadas al modelo de partido. En contraste, el anarquismo mantuvo una invariable posición apartidista, promoviendo las tradicionales agrupaciones obreras y de propaganda. Aunque más flexibles que el partido político, estas organizaciones adolecieron de una constante fragmentación, que impidió a los anarquistas una coordinación eficaz durante las profundas transformaciones de la coyuntura crítica.

Durante la etapa de consolidación del clivaje de clase tratado en el capítulo 5, los debates organizacionales se articularon casi exclusivamente en torno al modelo de partido político aparejado al predominio de las vías institucionales. La dispersión organizativa del anarquismo, así como la legalización del sindicalismo, desplazaron casi por completo las alternativas apartidistas. En contraste, el eje divisorio de la dimensión organizacional del socialismo se articuló en torno a la aplicación del modelo bolchevique en el Partido Comunista durante la década de 1930. En este caso, el modelo de partido estuvo fuertemente ligado a la identidad ideológica, toda vez que la pertenencia al comunismo exigía a sus miembros la estricta aceptación de sus normativas y estructuras. Esto introdujo una división permanente con los grupos socialistas alternativos organizados en 1933 en el Partido Socialista, que reivindicaban una estructura ideológicamente más democrática y libre que la de sus pares comunistas. Igualmente, cabe destacar que, aunque ambos partidos levantaron agrupaciones no partidarias destinadas al trabajo de masas, estas funcionaban como extensiones de sus estructuras centrales y no gozaban de autonomía ideológica. Así, hacia finales de la década de 1930, el modelo de partido había alcanzado una hegemonía indiscutida en el campo socialista chileno, estando plenamente integradas al sistema de partidos.

En suma, mediante la integración del ámbito organizacional en su relación con la ideología, se espera complementar la dimensión estratégica y permitir, de ese modo, una visión más completa sobre el proceso de clivajes en el caso chileno. Considerando que el modelo de clivajes trata precisamente sobre la institucionalización partidaria de ciertos conflictos sociales, el foco en las alternativas de organización resulta relevante para explicar cómo y por qué ciertas corrientes del socialismo fueron más exitosas que otras en la consecución de sus objetivos y, a la postre, en la institucionalización del conflicto de clase. En este sentido, como sostiene Bartolini (2000: 27), la importancia de la organización, denominada en su trabajo “redes organizacionales”, resulta crucial para comprender cómo los clivajes son “organizacionalmente encapsulados”. Sin embargo, al considerar esta dimensión en el análisis no se tiene el propósito de identificar o establecer modelos o patrones de organización. Más bien, lo que se

busca mediante el análisis de la dimensión organizacional de las ideologías es destacar cómo las formas de organización e institucionalización de un grupo responden también a un conjunto de decisiones guiadas ideológicamente.

1.3.3 Adaptabilidad y oportunidad política

La tercera dimensión de análisis propuesta corresponde a la adaptabilidad de las ideologías. Como se vio anteriormente, las ideologías, en su expresión lingüística, tratan principalmente sobre el vocabulario descriptivo y evaluativo que los actores políticos utilizan para referirse a la realidad social. Más específicamente, el aparataje lingüístico y conceptual de las ideologías se desenvuelve en contextos políticos, sociales y culturales concretos, los que imponen límites y posibilidades a la aplicabilidad de sus contenidos. A su vez, estos son moldeados por las diversas interpretaciones ideológicas en conflicto. En este sentido, el análisis de la dimensión ideológica de los clivajes requiere también un examen sobre cómo las ideologías se desenvuelven y adaptan a dichos contextos, cómo responden a los cambios y transformaciones contingentes y estructurales, pero también cómo influyen sobre el curso de dichas transformaciones. Así, el éxito o fracaso de ciertos grupos para definir, representar y canalizar los conflictos depende en parte del nivel de adaptabilidad, flexibilidad y plasticidad que poseen sus contenidos ideológicos. Mientras algunas ideologías pueden surgir y proliferar bajo ciertos contextos particulares, su contenido puede no ser lo suficientemente flexible para responder a eventos específicos o transformaciones de largo plazo. Igualmente, ideologías con escasa recepción en determinadas circunstancias, pueden mostrarse mejor equipadas conceptualmente para responder a cambios no previstos. En lo que sigue, se detallan algunos aspectos de esta dimensión enfatizando en cómo las ideologías perciben y responden a dos campos contextuales particulares, el político-institucional y lingüístico-intelectual, ambos relevantes para el análisis del socialismo en Chile.

Desde el estudio de los marcos de acción colectiva y los movimientos sociales, la dimensión de adaptabilidad y respuesta al contexto es objeto de análisis a través del concepto de “estructuras de oportunidad política” (*political opportunity structures*) (Eisinger, 1973; Kitschelt, 1986; Gamson y Meyer, 1996; Meyer y Minkoff, 2004; Kriesi, 1995, 2004; Tarrow, 2011). Aunque como advierten Gamson y Meyer (1996) el concepto de oportunidad política ha sido definido en términos demasiado amplios, corriendo el riesgo de perder su capacidad explicativa, en general el término remite a “las dimensiones consistentes –aunque no necesariamente formales o permanentes– del ambiente político o de cambio en ese ambiente que provee incentivos para la acción colectiva” (Tarrow, 2011: 163). O bien como “una configuración específica de recursos, arreglos institucionales y precedentes históricos para la movilización social”, que pueden facilitar o limitar el desarrollo de movimientos de protesta (Kitschelt, 1986: 58). Aunque esta aproximación se enfoca principalmente al estudio de los movimientos sociales, resulta relevante pues

proporciona una categoría que identifica el conjunto de variables que delimitan un contexto político (Kriesi, 2004), el cual “puede moldear o constreñir los movimientos”, pero sobre el cual “los movimientos también pueden crear oportunidades”. De ese modo se combinan elementos estructurales con la agencia de los actores involucrados (Gamson y Meyer, 1996: 276).

Siguiendo a Gamson y Meyer (1996) y Kriesi (2004), es posible identificar dentro del ámbito estructural del contexto político dos dimensiones específicas: la dimensión política institucional y la dimensión cultural. Respecto a la dimensión institucional, esta ha sido ampliamente incorporada dentro de las definiciones de contexto político, refiriéndose a una serie de características de los arreglos institucionales del Estado. Estos arreglos incluyen el grado de apertura del sistema político, nivel de centralización territorial, separación de poderes, fortaleza del Estado, formas de coerción/inclusión, así como los alineamientos políticos, coaliciones sociales y políticas, y la unidad interna de los grupos dirigentes (Eisinger, 1973; Kriesi, 1995, 2004; Kitschelt, 1986; Tarrow, 2011). En general, los argumentos en torno a la dimensión político institucional tienden a coincidir en que los arreglos institucionales con características excluyentes o cerrados a la participación de nuevos grupos sociales son más proclives a generar eventos de protestas y movimientos contestatarios. Estas características suelen expresarse en sistemas de partidos y electorales más restrictivos, en métodos de contención más coercitivos que inclusivos, o bien en sistemas políticos poco receptivos a las demandas de la sociedad o reacios a incorporar a nuevos grupos. Como se verá luego, la dimensión político institucional constituye un elemento estructural significativo en vista de la transformación que experimentaron los estados latinoamericanos, incluyendo el caso chileno, durante el periodo acá estudiado, pasando gradualmente de repúblicas oligárquicas hacia estados democráticos durante principios del siglo XX (Drake, 2009).

Paralelamente a la dimensión institucional, los estudios sobre oportunidad política han incluido también una dimensión cultural, que definida en una gran variedad de sentidos (Hart, 1996; Williams, 2004), pudiendo incluir elementos tan diversos como mitos, valores, sistemas de creencias, temas culturales, conciencia de clase, etc. (Gamson y Meyer, 1996: 281). En este ámbito, en un intento por abarcar esta variedad de expresiones culturales, Koopmans y Statham (1999: 228) han propuesto el término “estructura de oportunidad discursiva” (*discursive opportunity structure*) para identificar “qué ideas son consideradas ‘sensibles’, qué construcciones de la realidad son vistas como ‘realistas’, y que afirmaciones son sostenidas como ‘legítimas’ dentro de una cierta política en un tiempo específico”. Este campo cultural o estructura discursiva es particularmente relevante para el análisis de las ideologías, ya que se desenvuelven en dicha dimensión contextual. Van Dijk (1999: 228), por ejemplo, sostiene que las ideologías operan precisamente sobre una base de conocimiento cultural común, es decir, aquel conjunto de creencias sociales generales dentro del cual operan las ideologías particulares. Por su parte, Freedman (1996) reconoce la importancia de los ambientes ideacionales

(*idea-environment*) en la adopción de significado de las configuraciones conceptuales ideológicas. Un concepto similar se encuentra en Wuthnow (1989: 6-7), quien denomina condiciones ambientales (*environmental conditions*) e institucionales a los contornos sociales, culturales, políticos y económicos de una época que proveen los recursos necesarios para la formación de movimientos culturales innovadores. Sin embargo, en vista de la gran cantidad de fenómenos que pueden incluirse en esta dimensión (donde ideología también es parte integral), y considerando la aproximación conceptual-discursiva a las ideologías, el contexto cultural será limitado a la relación entre las ideologías con su contexto lingüístico-intelectual, entendido como el conjunto términos y conceptos que conforman el “vocabulario normativo” de una sociedad en un periodo determinado (Skinner, 1985: 11).

Es, entonces, frente a estas dimensiones estructurales que los actores se posicionan y establecen sus estrategias y medios de acción. Estas dimensiones bien pueden ser más estables y permanentes, apareciendo como “ajenas” a los actores políticos, o bien altamente contingentes, pudiendo escapar del pronóstico de los propios actores. Lo relevante, sin embargo, es cómo los sujetos interpretan y dan sentido a esos elementos y cambios contextuales. Como afirma Gamson y Meyer, “los marcos de acción colectiva niegan la inmutabilidad de ciertas situaciones indeseables y la posibilidad de cambiarlas a través de alguna forma de acción colectiva”, definiendo “a la gente como agentes potenciales de su propia historia” (1996: 289). Es precisamente en este ámbito en que las ideologías desempeñan un rol preponderante. Como se ha enfatizado, las ideologías proveen una visión particular sobre la realidad social y, por lo tanto, el contenido de las creencias ideológicas es un insumo crucial en el modo en que los grupos significan su contexto y se adaptan a los cambios. Este rol de las ideologías es aún más relevante si se considera que las oportunidades políticas que presentan los contextos institucionales y culturales no son “objetivas”, sino que son esencialmente “percibidas” como tales (Tarrow, 2011: 163-164). Estas percepciones son usualmente exacerbadas y exageradas por los activistas (Gamson y Meyer, 1996: 286) a través de las ideologías mediante el efecto de “*negación del espacio* entre expectativas y realidad” que operan, sustentando así una acción entusiasta basada en un eventual, pero incierto, resultado positivo (Melucci, 1996: 350).

La dimensión de adaptabilidad, por lo tanto, tratará principalmente sobre cómo se emplean los contenidos de las ideologías en los procesos políticos en relación con sus contextos institucionales y lingüísticos, y más específicamente –cuando se trata con cambios o transformaciones contextuales– cómo los grupos responde a ellos, delimitando y perfilando las oportunidades políticas según sus creencias ideológicas. Esta relación entre ideología, contexto y adaptabilidad se desarrolla en dos sentidos. Por un lado, el contenido concreto de las ideologías se ve delimitado y restringido por las condiciones contextuales. En relación con la dimensión político-institucional, los arreglos institucionales de una sociedad determinan un conjunto de temas y cuestiones problemáticas que las ideologías se ven “obligadas” a tratar si

desean ser exitosas. La exclusión formal o informal del sistema político, la incapacidad de las instituciones estatales de responder a problemáticas sociales concretas, o la desatención deliberada de las mismas, demarcan las temáticas y el despliegue conceptual de las ideologías. Por este motivo, los grupos deben privilegiar ciertas áreas conceptuales por sobre otras con el fin de dar sentido a la situación y hacer viable su propia ideología. En lo relativo al contexto lingüístico, las ideologías se ven significativamente constreñidas por el vocabulario históricamente establecido, que restringe el rango de usos y definiciones posibles del lenguaje político de una sociedad.

Por otro lado, las ideologías funcionan como una potente herramienta de adaptación política. Tanto para el contexto institucional como el lingüístico, los grupos políticos pueden ejercer una influencia determinante en el sentido y significado que pueden adoptar los elementos contextuales. Este aspecto es destacado por Wuthnow (1989: 15) al referirse a la relación entre condiciones sociales e ideología. Por medio de los ideólogos, las condiciones sociales son “textualizadas”, estructuradas conceptualmente y tematizadas, con lo cual median entre el presente y las realidades idealizadas futuras. Es en este sentido que el lenguaje político funciona como elemento constitutivo de la realidad social, en tanto las ideologías pueden definir el carácter de las prácticas y las instituciones con las que interactúan. Aunque acá se ha tomado distancia de su aproximación, esta es precisamente una de las fortalezas de la teoría de Laclau y Mouffe, en la medida que permite comprender cómo los hechos sociales no son independientes del modo en que los percibimos y definimos. Al mismo tiempo, las ideologías tienen una capacidad directa de incidir y alterar las convenciones lingüísticas e intelectuales, tarea en la cual los ideólogos cumplen una función crucial al innovar y redefinir los usos existentes de los términos clave del vocabulario. Así, los grupos pueden introducir en el debate público problemáticas antes ignoradas, dirigir los conflictos existentes hacia sus propios intereses, o redefinir los términos del debate según sus propias concepciones.

En vista de esta potencial influencia de las ideologías en sus contextos particulares, es claro que estas también cumplen un rol significativo en la configuración de oportunidades políticas. En parte, esta posibilidad está dada por las pautas de politización sobre las que inciden, pero también porque establecen un “modelo de contexto”, en el cual los actores “ven, interpretan y representan mentalmente las propiedades de la situación social que ahora son relevantes para ellos” (Van Dijk, 1999: 267), permitiéndoles a los grupos adoptar una posición acorde frente a un hecho determinado. Por cierto, esta dimensión de las ideologías no asegura necesariamente el éxito de su adaptación. Frecuentemente los grupos realizan lecturas erradas del contexto, o bien sus creencias ideológicas pueden resultar altamente inadecuadas para nuevos contextos, perdiendo legitimidad o cayendo en desuso. Sin embargo, independiente de su eventual nivel de éxito, todo grupo ideológico intentará moldear y definir una situación particular de un modo que le resulte favorable.

Las consideraciones acá planteadas respecto a la adaptabilidad de las ideologías y el concepto oportunidad política, permiten identificar tres momentos diferenciados en la inserción del socialismo en el clivaje de clases en Chile. Un primer momento corresponde al llamado periodo parlamentario chileno entre la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX. Durante este periodo, que coincide con la fase de desarrollo inicial del socialismo, el Estado chileno se caracterizó por un alto nivel de exclusión social y política hacia aquellos sectores sociales que no pertenecían a las élites oligárquicas decimonónicas. En la institucionalidad política, esta exclusión se expresó en un régimen político dominado por los partidos políticos tradicionales –representantes de las élites locales– con bajos niveles de apertura a fuerzas políticas alternativas. En el campo intelectual, los principales debates del periodo se desarrollaron en torno al reconocimiento de la cuestión social que aquejaba a las clases obreras y populares. Aunque estos debates fueron impulsados por intelectuales y reformistas de capas medias y altas, el reconocimiento del conflicto social por parte de las élites gobernantes fue limitado. En este sentido, las estructuras de oportunidad política, tanto institucionales, discursivas y culturales fueron limitadas. Durante este primer momento, el socialismo se desarrolló principalmente al margen de la institucionalidad y como una corriente intelectual crítica externa al régimen político. Desde esta posición, el margen de oportunidad política para el campo socialismo fue limitado, con escaso éxito en romper la exclusión social y política del periodo.

Un segundo momento corresponde a la coyuntura crítica del sistema de partidos iniciada en 1920. Durante este periodo, la estructura de oportunidad política experimenta transformaciones profundas, con consecuencias a largo plazo para la incorporación política del campo ideológico socialista. El principal cambio se produce con la elección presidencial de 1920, que inaugura el reconocimiento de la cuestión social de parte del sistema político en su conjunto. Esto se tradujo en una apertura discursiva hacia la incorporación del movimiento obrero y con ello, en una oportunidad política para los grupos socialistas que hasta entonces operaban como fuerzas externas al sistema de partidos. No obstante, esta apertura discursiva no se concreta en una apertura institucional inmediata. Este solo ocurre en 1924 con la intervención política de los militares, que ponen abrupto término al régimen parlamentario decimonónico. Sin embargo, el campo socialista se mantiene al margen de estas transformaciones, sin incidencia directa sobre el curso de las reformas institucionales. Asimismo, a pesar del cambio constitucional de 1925, las prácticas del régimen parlamentario se mantienen en lo fundamental inalteradas. A pesar de ello, este periodo destaca igualmente como una fase inicial de inserción institucional del socialismo. En este sentido, su margen de oportunidad política se amplía no solo por los procesos políticos externos, sino también por la acción de las agrupaciones sociales. Es decir, el campo socialista comienza a crear sus propias oportunidades políticas a partir de su desarrollo estratégico y organizacional del periodo previo. Para efectos del análisis, la coyuntura crítica del sistema de partidos

chilenos se considerará el principal escenario de oportunidad política para las agrupaciones socialistas, cuyos resultados determinarán su incorporación al clivaje de clases.

A pesar de que la apertura discursiva e institucional es drásticamente interrumpida en 1927 al establecerse un régimen autoritario, las dinámicas de oportunidad política previas no se ven alteradas con el restablecimiento democrático en 1931. En este tercer momento, las estructuras de oportunidad política se profundizan, tanto a nivel discursivo como institucional, resultando en una incorporación efectiva del socialismo al sistema de partidos. Cabe destacar que, en este proceso, la inserción del campo socialista ya no depende tanto de las condiciones institucionales externas –en gran medida aún adversas– como más bien del despliegue autónomo de sus propias concepciones estratégicas. Desde este punto de vista, la incorporación partidaria de sus dos principales organizaciones, el Partido Comunista y el Partido Socialista, es en gran medida resultado de su capacidad para definir oportunidades políticas favorables, independiente del nivel de aceptación o rechazo del resto de las fuerzas políticas.

En síntesis, el uso de la categoría de oportunidad política está dirigido a comprender cómo los grupos pertenecientes al campo socialista se desenvuelven en el periodo de transformación del sistema de partidos en Chile. Es en este proceso en que se examinará la capacidad de adaptabilidad ideológica de los casos analizados, cuyo foco central está puesto en el nivel de *agencia* política que tienen los actores. En gran medida, la adaptabilidad no debe entenderse tanto como un elemento autónomo, como más bien el resultado de la interacción de las dos dimensiones previamente descritas, la estratégica y la organizacional. Es decir, la adaptabilidad se analiza a partir de la respuesta que la configuración ideológica –conceptual, estratégica y organizacional– de cada grupo proporciona frente a los cambios contextuales, ya sea contingentes o estructurales. Pero, al mismo tiempo, a partir de la capacidad que demuestra cada ideología para incidir en el desarrollo y resultados de dichos cambios contextuales.

1.4 Conclusiones

El modelo de clivajes políticos constituye una de las principales aproximaciones al estudio de los procesos de formación partidaria y sistemas de partidos. Aunque el concepto de clivaje ha sido utilizado y definido desde diversas perspectivas, en general sus usos retienen la premisa básica que plantearon inicialmente Lipset y Rokkan, esto es, que la categoría de clivaje se refiere a los procesos de estructuración de los sistemas de partidos, en donde los conflictos sociales surgidos de las revoluciones nacionales e industrial fueron canalizados hacia el campo político e institucionalizados en los partidos políticos modernos. Atendiendo a las particularidades de cada caso, el estudio de los clivajes ha recibido diferentes énfasis en los estudios sobre partidos y sistemas de partidos, ampliando considerablemente las discusiones en torno al concepto. Europa occidental y, en general, las

democracias industrializadas avanzadas, han constituido el estudio caso tradicional de los clivajes a partir de los cuales se han establecido los patrones de formación partidaria que debiesen surgir de los procesos de conflicto social. En este sentido, los estudios sobre estos países se centran en los principales ejes de conflictos que estructuraron sus sistemas de partidos, el de clase y el religioso, estando dirigidos sobre todo a evaluar la vigencia, continuidad o cambio de dichas oposiciones políticas en los sistemas políticos contemporáneos.

En contraste, el estudio de los países latinoamericanos ha implicado una revisión sobre la aplicabilidad de dicho modelo. En términos generales, a causa de la debilidad histórica de los partidos en la región, con difusas líneas políticas y programáticas, alta volatilidad electoral, y en algunos casos la inexistencia o irrelevancia de estas organizaciones, el modelo de tradicional de clivajes europeos ha sido puesto en cuestión al no explicar con igual claridad el desarrollo político latinoamericano. Por este motivo, en general el análisis sobre clivajes en América Latina es menos sistemático, o bien es abordado indirectamente a través del estudio de los quiebres democráticos y los niveles de institucionalización de sus sistemas de partidos. No obstante, el concepto aún retiene su valor analítico a la luz de los procesos de redemocratización en las décadas de 1980 y 1990, donde los sistemas de partidos sufrieron cambios profundos, desarticulándose en algunos casos, institucionalizándose en otros, o dando origen a nuevos clivajes que antes ocupaban un lugar secundario. Dentro de este marco, el caso chileno ha sido comúnmente reconocido como una excepción dentro de la región al mostrar un desarrollo similar a los europeos, con un claro eje izquierda-derecha, articulado en torno al conflicto religioso y de clase. Tras el retorno a la democracia, y de modo similar a los casos europeos, el debate en torno a los clivajes ha tratado principalmente la continuidad o reorganización de las oposiciones partidarias tradicionales, con algunos escasos estudios que aventuran el posible surgimiento de nuevos clivajes sociales y políticos.

En vista de la numerosa bibliografía existe sobre clivajes, es posible afirmar que a pesar de las variaciones significativas que han experimentados los sistemas de partido a nivel global y las diferencias entre las regiones, la categoría de clivajes ha retenido su utilidad analítica explicar el desarrollo de procesos históricos complejos. No obstante, al mismo tiempo la literatura disponible sobre clivajes presenta dos limitaciones importantes. En primer lugar, la gran mayoría de estos trabajos se centran en la evolución y proyección de los alineamientos partidarios una vez que estos ya se encuentran consolidados. En segundo lugar, los métodos de análisis empleados en estos estudios son predominantemente cuantitativos, concentrándose casi exclusivamente en variables asociadas al comportamiento electoral. En consecuencia, los estudios sobre clivajes disponibles no profundizan en los procesos históricos de formación partidaria, ni tampoco en el contenido político implicado en dichos procesos, concentrándose casi exclusivamente en sus variables y proyecciones institucionales.

En contraste con estas perspectivas, en este capítulo se ha planteado una aproximación diferente al estudio de los clivajes políticos, concentrándose en su dimensión ideológica. Es decir, se propone abordar la formación de los clivajes desde las perspectivas de las corrientes de pensamiento político involucradas en este proceso. Tomando como base las distintas aproximaciones conceptuales y discursivas al estudio de las ideologías, estas se han definido como el conjunto de representaciones sociales colectivas de un grupo, las que entregan a sus miembros un conjunto de creencias sobre la organización de la sociedad. Desde esta perspectiva, las ideologías entregan a los sujetos una cierta visión de mundo, permitiéndoles interpretar la realidad desde un punto de vista particular, y actuar en consecuencia con ello. En un nivel empírico, se ha sostenido que esta definición de ideología se expresa principalmente a través del lenguaje, es decir, por medio de las configuraciones conceptuales y el vocabulario político que emplean y movilizan las ideologías. Más concretamente, se ha argumentado que a través del lenguaje las ideologías están involucradas en la lucha política por medio de la disputa por los significados del vocabulario político de una sociedad, al tiempo que funcionan, en tanto actos de habla, como uno de los principales medios para incitar a la acción política.

A partir de este marco conceptual, se han definido las tres dimensiones de análisis de las ideologías descritas en este capítulo: la dimensión estratégica, la dimensión organizacional, y la dimensión de adaptabilidad y oportunidad política. Mediante estas tres dimensiones se espera examinar la forma en que el desarrollo ideológico del socialismo en Chile le permitió integrarse al proceso de formación del clivaje partidario de clase. A diferencia de las aproximaciones politológicas, no se busca identificar patrones de comportamiento electoral ni de formación partidaria. Por el contrario, se busca profundizar el contenido mismo del proceso, identificando las distintas vías políticas formuladas al interior del campo socialista chileno como respuesta al conflicto de clase. El supuesto fundamental de este marco de análisis consiste en que el éxito de las distintas corrientes socialistas que buscaban canalizar el conflicto de clase se explica por sus respectivas configuraciones ideológicas en los ámbitos descritos, las que determinaron en gran medida la *agencia* política de cada una de ellas. De ese modo, la investigación plantea una aproximación a la ideología no desde sus contenidos puramente intelectuales y conceptuales, sino como un fenómeno con implicancias esencialmente prácticas en los procesos políticos e indispensable para comprender en detalle el desarrollo a largo plazo de los sistemas políticos y de partidos.